Biblioteca Daniel Cosío Villegas
EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.

El Colegio de México

Título:

CONTRADICCIONES Y REPERCUSIONES DEL ESTADO UNITARIO EN LAS ESTRUCTURAS ALDEANAS: UNA MIRADA DESDE LAS PROVINCIAS DE KIVU

Trabajo Final presentado por

Marco Antonio Reyes Lugardo

En conformidad con los requisitos
establecidos para recibir el grado de

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA
ESPECIALIDAD EN ÁFRICA

Centro de Estudios de Asia y África
2005

EL COLEGIO DE MEXICO
DIRECCION DE ASUNTOS
19 ENE 2005
ESCOLARES
MEXICO, D.F.

En memoria de mi Papá Arturo:
Me enseñaste a ser como tú,
pero nunca aprendí a vivir sin ti.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Introducción y objetivos 1
Hipótesis y espacio temporal y geográfico 2
Marco teórico 5

Capítulo I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 10

El Congreso de Berlín (1884-1885) 11
El Congo belga 14
La Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nacionalismo congolés 17

Capítulo II

EL ASCENSO DE MOBUTU SESE SEKO Y LA LEY DE BARAJIKA 20

El sistema kalinzi y las nuevas leyes de propiedad: legalidad territorial e ilegitimidad estatal 21
Mobutu Sese Seko y las élites de origen rwandés beneficiadas con la zaireanización 24
El colapso del Estado neopatrimonialista 29
Los territorios orientales del Congo: la tierra y la constante superposición de identidades 34
De los enclaves económicos hacia el fenómeno de los señores de la guerra (*warlordism*) 35

Capítulo III

LAS PROVINCIAS DE KIVU DEL NORTE Y DEL SUR, GRUPOS REBELDES Y GOBIERNO NACIONAL: ¿FRAGMENTACIÓN O INCREMENTO DEL PODER ESTATAL? 40

Joseph Kabila: compartir el poder o el territorio 42
Los acuerdos de la transición y los nuevas prácticas de señores de la guerra 45
Tierras vacantes y explotación de recursos minerales: repercusiones en las estructuras sociopolíticas aldeanas 49

Capítulo IV

LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA TRANSICIÓN 52

La composición del nuevo gobierno de transición: la fórmula "1+ 4" 53
Vino nuevo en odres viejos 55

CONCLUSIONES 58

Referencias Bibliográficas 61
Siglas 63
Anexo 65

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo nunca hubiese sido realidad sin el enorme apoyo, esfuerzo y sacrificio de toda mi familia: gracias Papá por darme todo lo que nunca hallaré en los libros; gracias Mamá por ese corazón tan grande que nunca se cansa de latir por nosotros; gracias hermano por servirme de ejemplo y sostén en todo lo que hago; gracias Dolores por compartir mis sueños y mis horas de desvelo. Agradezco profundamente también a mis colegas Indira Sánchez, Paulina Aroch, Lourdes Íñiguez, Jacob Santillán y Mario Gonzáles por todo lo que sólo ellos saben que hemos vivido. Deseo además agradecer profundamente: a mi directora, la doctora Hilda Varela Barraza por toda su paciencia y soporte; a la maestra Celma Agüero por sus valiosas charlas y por el interés prestado en la elaboración de esta tesis; a mis lectores, los doctores Mónica Cejas y Arturo Saavedra por su atenta lectura y sus valiosos comentarios. A todos ellos los eximo de cualquier responsabilidad derivada de los errores que seguramente se hallan en el texto, mismos que no han tenido por origen la falta de consejos.

CONTRADICCIONES Y REPERCUSIONES DEL ESTADO UNITARIO EN LAS ESTRUCTURAS ALDEANAS: UNA MIRADA DESDE LAS PROVINCIAS DE KIVU

Introducción

La situación sociopolítica de la República Democrática del Congo (RDC)[1] se caracteriza, desde el año 2003, por la existencia de un gobierno de transición conformado por el presidente de la república, Joseph Kabila, y por los líderes de los tres principales grupos armados[2] que –apoyados por los gobiernos de Rwanda y Uganda mayoritariamente– desde 1994 llegaron a ocupar cerca de dos terceras partes del territorio congolés[3].

Pese a la firma de los acuerdos de paz en el año 2003, el Estado congolés aún no logra establecer una autoridad efectiva, soberana y legítima sobre un territorio nacional cercano a los dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Las milicias rwandesas y ugandesas, ciertamente, se han retirado casi por completo. Sin embargo, por muy distintos medios, los gobiernos de Rwanda y Uganda aún mantienen un fuerte dominio en las zonas del Congo que dichos gobiernos ocupaban militarmente hasta el año 2003.

Objetivos

El objetivo principal del presente estudio radica en describir el tipo de Estado que desde el periodo colonial se ha intentado construir en Congo, cuáles han sido los mecanismos

---

[1] En adelante se denominará a la República Democrática del Congo como Congo únicamente o en su defecto como RDC. Lo que hoy día se conoce como República Democrática del Congo ha conocido distintas denominaciones, a saber: Estado Independiente del Congo (1985-1908), Congo Belga (1908-1960), República del Congo (1960-1971), Zaire (1971-1997), República Democrática del Congo nuevamente (1997...) Por supuesto, vale la pena advertir que no hay que confundir al país estudiado con la República del Congo, cuya ciudad capital es Brazzaville.

[2] A partir de las negociaciones de Sun City, Sudáfrica, llevadas a cabo en el año 2003, el gobierno congolés logró integrar bajo diversos cargos gubernamentales al RCD, MLC, RCD-ML/K, y al RCD-N.

[3] Sobre la situación de los territorios de la RDC que los grupos rebeldes llegaron a ocupar en el año 2000, véase mapa 1.

económicos, legales y políticos que tanto el gobierno colonial como el independiente han implementado. Un segundo objetivo radica en conocer y describir cuáles son las contradicciones y repercusiones que el proceso de edificación estatal ha tenido sobre las formas locales de organización, legitimación y ejercicio del poder político. De igual forma, se intenta esbozar algunos de los mecanismos de resistencia que las estructuras aldeanas han impulsado en contra del establecimiento del sistema de dominación estatal. Como parte de un tercer objetivo se pretende describir porqué el Estado congolés –a pesar de los diferentes acuerdos firmados con los grupos rebeldes y de la promulgación de una nueva Constitución– aún no logra construir una capacidad y una legitimidad efectivas al interior de los territorios ocupados militarmente por grupos rebeldes apoyados por los gobiernos de Rwanda y Uganda hasta 2003.

Hipótesis y espacio temporal y geográfico

Este trabajo tiene como hipótesis principal que la incapacidad e ilegitimidad del gobierno congolés tienen como una de sus principales causas las políticas de expropiación territorial que desde el espacio colonial han venido siendo aplicadas y que han tenido como objetivo la construcción de una estructura de poder estatal de tipo unitario cuya lógica de funcionamiento contradice a la propia de las unidades aldeanas. De este modo, la serie de hipótesis secundarias que este estudio presenta son las siguientes:

a). La incapacidad y la ilegitimidad del régimen gubernamental tanto de la fase colonial como del periodo independiente en el Congo encuentran su origen en el enfrentamiento entre dos formas de organizar el poder político: aquella que opera en las unidades aldeanas que conciben a la tierra como un bien social, inalienable y sagrado *versus* la propia del Estado unitario de cuño occidental que requiere, para

instalarse, entre otras cosas, la subordinación de las unidades aldeanas con el objetivo de formar un espacio público único.

b). Las políticas de apropiación territorial que tanto el gobierno colonial como los gobiernos de los años independientes han instaurado, lejos de conformar un espacio público claramente delimitado no sólo han desembocado en la ilegitimidad de la autoridad estatal, sino también han provocado que algunas unidades aldeanas –con el fin de conservar su relativa autonomía– se retiren hacia zonas en las cuales la penetración estatal es escasa o nula.

b). La promulgación de leyes de expropiación que atentan contra las formas aldeanas de tenencia territorial no sólo no ha terminado por conformar un espacio público claramente definido, sino que ha creado ambigüedades legales en torno a quiénes son los dueños originales de las tierras.

c). Así, la conjunción de territorios en los cuales la autoridad estatal es nula y de subsistemas políticos aldeanos que tienen como uno de sus principales ejes de funcionamiento la conservación de su autonomía relativa ha delineado las condiciones propicias para la aparición de señores de la guerra (*warlords*) que principalmente actúan en las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur.

d). En la medida en que el gobierno de transición formado desde 2003 no ha propuesto un marco constitucional que busque resolver el asunto de las formas tradicionales de tenencia de la tierra, la capacidad y legitimidad estatal al interior de las provincias de Kivu no tiende a incrementarse. De este modo, la integración de los principales grupos rebeldes en el gobierno de unidad nacional representa una fragmentación del ya de suyo incipiente poder estatal

e). Finalmente, desde el momento en que la nueva Constitución de la Transición deja intacta la ambigüedad legal de la posesión y/o propiedad de la tierra, las condiciones jurídicas en Kivu continúan favoreciendo el fenómeno de los señores de la guerra.

El corte cronológico en el cual se ha de enfocar este trabajo abarca del año 1973 hasta 2004. La primera de estas fechas se justifica en función de que fue en tal momento cuando el gobierno de Mobutu Sese Seko promulgó la ley de expropiación de Barajika o Ley de 1973. El inicio del periodo histórico que habrá de ser revisado a lo largo de las páginas siguientes encuentra otro elemento de justificación en razón de que fue a raíz de la emisión de Ley de 1973 cuando se empezaron a gestar enfrentamientos importantes entre las diversas formaciones socioculturales aldeanas establecidas en Kivu del norte y Kivu del sur.

De igual manera, el año de 2004 ha sido seleccionado como punto final del espacio cronológico debido a que permite revisar los artículos de la Constitución de la Transición promulgada en el año 2003 y, a partir de ello, conocer si tales elementos constitucionales tienden a solucionar el problema de la ambigüedad existente entre las formas de tenencia tradicional y de propiedad privada.

El espacio geográfico a estudiar son las dos provincias congolesas de Kivu,[4] ya que fue en tales sitios en donde recayeron los impactos más visibles de la Ley de 1973. Además. Las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur han sido seleccionadas como marco geográfico debido a que ambas fueron el escenario principal de las dos guerras (1994 y 1998) que desembocaron en la ocupación territorial de dos terceras partes del Congo por parte de los gobiernos de Rwanda y Uganda.

[4] Véase mapa 2.

A fin de abordar las seis anteriores hipótesis, este trabajo está dividido en cuatro apartados: el primero de ellos delinea las políticas de expropiación territorial que el gobierno colonial implementó en el Congo con el fin de sentar las bases de un Estado unitario. De igual forma, se busca describir algunas reacciones emprendidas por partes de las unidades aldeanas en contra de una dominación política, social y económica que juzgan ilegítima.

Un segundo capítulo aborda la agudización de dichas políticas expropiatorias durante los años del gobierno de Mobutu Sese Seko (1965-1997) al igual que algunas de sus principales repercusiones sobre la legitimidad estatal y la organización tradicional aldeana. Un tercer apartado dará cuenta de cómo las políticas neopatrimonialistas y de expropiación territorial emprendidas por el mobutismo, generaron enfrentamientos de apariencia étnica y de trasfondo territorial. En este mismo capítulo se describirá la transformación de enclaves económicos en "feudos" controlados por los "señores de la guerra".

Finalmente, el último capítulo pone en tela de juicio si la conformación del gobierno de unidad nacional amplia y el marco constitucional de 2003 tienden a la resolución de las ambigüedades legales existentes en torno a la posesión y/o propiedad de la tierra y por tanto a la reducción de las prácticas económicas relacionadas con el fenómeno de los "señores de la guerra".

Marco teórico

Una primera corriente de análisis que tiene como objeto de estudio la escasa autoridad e incapacidad del Estado congolés encuentra las causas de tal problemática en la dinámica propia de la estructura estatal que el colonialismo importó hacia el Congo. En efecto, para Leroy, el colonialismo trajo consigo un Estado unitario, es decir un aparato de dominación

que en tanto buscaba otorgar determinado sentido y coherencia a lo social, implicaba reducir la diversidad legal, social y política precolonial a favor de la implantación de una instancia estatal única.[5] Para la teoría del Estado unitario, una de las consecuencias de dicha imposición fue que el aparato estatal carecía de la legitimidad interior ya que su edificación tenía como uno de sus principales sustentos la apropiación de la territorialidad y la subordinación económica y política de las unidades sociopolíticas aldeanas.

Una segunda vertiente de análisis que se ocupa del problema de la escasa autoridad e ilegitimidad del Estado congolés explica dicha problemática en función del "colapso estatal", es decir un aparato estatal que ha dejado de desempeñar las funciones que se requieren para ser aceptado como Estado, a saber: una institución política que actúe de forma soberana al interior de un territorio (una fuente aceptada de identidad en el campo de la política) y un garante de la seguridad de una población al interior de un territorio. Zartman (1995: 5)

En el caso del Congo, prosigue Zartman (1995: 2-3), ha habido dos colapsos estatales: 1) el colapso del Estado colonial, y que estuvo marcado por una crisis de reconocimiento mutuo entre los diversos actores políticos implicados y las instituciones estatales, lo que a su vez, desencadenó la intervención internacional con el fin de restaurar la ley y el orden. 2) el derrumbe del régimen autoritario y neopatrimonialista de Mobutu Sese Seko, que había gobernado durante 1965 a 1997, y que fue derrocado por el régimen de Laurent Kabila. (1997-2001)

Una tercera teoría concibe a la RDC como un "Estado fracasado", esto es un aparato de dominación política cuya capacidad para proveer bienes públicos, institucionalizar las

[5] Es conveniente recordar que, tal como sostiene Le Roy, las sociedades africanas nunca tuvieron una tradición sociopolítica de carácter unitario, y en ese sentido la lógica del Estado unitario es una trasposición.

normas del servicio civil, y mediar de manera efectiva en los conflictos etno-regionales ha fallado. (Lemarchand, 2003: 30) Así, las dos últimas posturas teóricas consideran que los problemas sociopolíticos que actualmente aquejan a la RDC son el resultado de un aparato estatal que, por muy distintos motivos y en diferentes momentos históricos, se ha derrumbado y que ha dejado de cumplir las funciones que le atañen.

En suma, las teorías del colapso y/o fracaso estatales explican principalmente la caída de un tipo de Estado (neopatrimonialista), el cual tuvo su vigencia en África alrededor del periodo de 1960 a 1990. "El neopatrimonialismo es un sistema político informal basado en el gobierno personal y organizado a través de redes clientelares de patronazgo, lealtad personal y coerción". (Lindberg, 2003: 123)

El mantenimiento del sistema neopatrimonial, señala Lindberg (2003: 123), requiere que el gobernante proporcione constantemente de recursos a sus seguidores. Así, para adquirir los bienes necesarios para asegurar la lealtad política, los gobernantes de los sistemas neopatrimonialistas tienen que recurrir a muy distintas fuentes de aprovisionamiento. En el caso del Congo, la deuda externa adquirida para solventar los gastos de manutención del sistema neopatrimonialista llegaron en 1975 a casi 3.5 billones de dólares y a cerca de 5 billones a finales de la década de 1980. (Young, 1984: 81). De ahí que, prosigue Young (1984: 81), desde 1975 el sistema neopatrimonialista y la lealtad política asegurada por medio de este último comenzó a erosionarse para finalmente colapsarse a principios del decenio de 1990.

Para los teóricos del Estado colapsado, como Weiss (1995: 157), Zaire fue un Estado en razón de que hasta fines de la década de 1980 obtuvo "...mucho de su legitimidad [exterior] a raíz de sus relaciones con otros Estados". Además, prosigue Weiss (1995: 157-158), si bien es imposible decir que el gobierno realmente controló todo el territorio

interior, tampoco se puede decir que –hasta 1994– alguna parte de su territorio estaba bajo el control de alguna otra autoridad. De igual, afirma Weiss (1995: 157), al neopatrimonialismo zairense le preocupaba más controlar las palancas internas que eran esenciales para la supervivencia del régimen (el dinero y la fuerza) y no aquellas que eran necesarias para el bienestar de la sociedad o de la ciudadanía (legitimidad interna).

Una cuarta explicación al problema de la escasa autoridad e ilegitimidad estatales tiene como uno de sus principales promotores a Hyden (1980) y combina la teoría weberiana que concibe al Estado como "...una comunidad humana que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado" (Weber, 1958: 78) con el funcional estructuralismo de Poulantzas (1980) para, en consecuencia, afirmar que el Estado en sentido estricto no existe en África debido a que las sociedades agrarias no han sido encuadradas dentro de las estructuras de clase propias del Estado capitalista.

En resumen, para fines del presente trabajo, se entenderá que el tipo de Estado importado hacia el Congo por el colonialismo europeo fue uno de tipo unitario capitalista, mismo que –siguiendo a Zartman– se colapsó alrededor de 1960 y que fue sustituido por un Estado de corte neopatrimonialista que gozaba de legitimidad internacional, pero carecía de la legitimidad interna y que se colapsa completamente en 1994. De igual modo, se puede aceptar que muchas de la unidades aldeanas en África efectivamente aún no han sido integradas en la estructura clasista propia del Estado capitalista. En suma, en tanto fue una imposición del colonialismo belga, el Estado congolés comparte en diversos grados y momentos históricos ciertas características de las cuatro teorías brevemente esbozadas.

Asimismo, por legitimidad interna se entenderá el nivel de congruencia existente entre los procedimientos de toma decisiones reconocidos como legítimos localmente y los

procesos del sistema estatal. (Olive, 1996: 4) Finalmente, en tanto en este estudio se considera que la legitimidad estatal interna incrementa la capacidad estatal (Englebert, 2000a: 11) se entiende por esta última al grado de penetración que la autoridad estatal tiene al interior de una población (Doornbos, 1990)

Capítulo I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Hasta antes de que el colonialismo belga buscara imponer un Estado de tipo unitario, el territorio jugó un papel puramente instrumental al interior del Congo. De este modo, una unidad sociopolítica se distinguía por su estilo de vida antes que por los límites del territorio en el cual se asentaba.

> "Muchas tribus africanas definieron sus identidades colectivas en razón de sus maneras tradicionales de vivir, las cuales incluían migraciones hacia nuevos lugares que iban siempre acompañadas de dioses o *totems* y aseguraban a la comunidad su sentido de continuidad". (Parekh, 2000: 179-80).

De tal manera, en las formaciones sociopolíticas anteriores al colonialismo, podía existir una multiplicidad de identidades que guardaban diferentes lealtades que podían ir desde lo religioso hasta lo territorial. Consecuentemente, los individuos podían atravesar de manera relativamente libre los distintos límites ya fueran religiosos, familiares o incluso territoriales de las formaciones políticas. Dicho de otra forma, estas identidades y sus correspondientes apegos o lealtades eran tenidas como características de la vida social. No sólo ello, sino que se consideraban como fuentes independientes de derechos y obligaciones. De forma específica, en el caso del Congo antiguo (ca. 1390-1678), éste fue más una unidad política que una entidad cultural. [6]

Por el contrario, la edificación del Estado unitario requiere hacer coincidir los límites territoriales con la nación, misma que además se proyecta como homogénea. Así, en

---

[6] Hasta antes de la colonización el Kongo se refería a una entidad política cuyos límites variaban de acuerdo con la suerte de la nobleza gobernante. De hecho, en sentido estricto, la palabra Kongo significa un espacio socialmente organizado. (MacGaffey, 1997: 47)

el Estado de corte unitario el concepto de territorio adquiere una importancia vital ya que constituye la base material del cuerpo estatal, el elemento que lo diferencia de los otros Estados y que no deja dudas acerca de dónde empieza y dónde concluye la autoridad estatal y su espacio público de aplicación de la ley.

> "Sus límites territoriales incluyen a sus miembros y les otorga una identidad política y geográfica distinta que incluye también un nombre colectivo. Entrar al territorio de un Estado es ingresar a su jurisdicción y estar sujeto a su autoridad". (Parekh, 2000: 180).

En suma, el Estado unitario no es nunca un instrumento culturalmente neutro, sino que está investido de un ropaje particular de orden político en el cual los gobernados están supuestos a privilegiar la lealtad hacia el Estado antes que cualquiera otra; de definirse a sí mismos y de relacionarse con los demás en tanto ciudadanos, esto es individualmente; y de respetar un mismo y único código de derechos y obligaciones. He ahí entonces una de las mayores especificadas que subyacen a la imposición del Estado en África: mientras el Congo anterior a la colonia sólo era una entidad política, el colonialismo lo convirtió *de jure* en una entidad cultural que no reflejaba de ninguna manera las formas de organización sociopolítica anteriores a la llegada de los europeos.

El Congreso de Berlín (1884-1885)

Los límites territoriales de lo que actualmente se conoce como República Democrática del Congo tienen su origen en las negociaciones que las potencias de la época llevaron a cabo durante el Congreso de Berlín de 1884. En este último se decidió que la Asociación Internacional del Congo (AIC) liderada en esos días por Leopoldo II, rey de Bélgica de 1885 a 1909, adquiriese la soberanía sobre el territorio congolés. La AIC hasta entonces había tenido que funcionar teóricamente como una empresa "filantrópica" y carente de

fines políticos. Pero una vez que los textos de Berlín le concedieron la condición de autoridad soberana en el Congo, un decreto real de Leopoldo II transformaría a la AIC en Estado Independiente del Congo. (*État Indépendant du Congo*-EIC)

Con el objetivo de establecer una ocupación territorial efectiva y de explotar los recursos de la recién otorgada colonia, Leopoldo II declaró en 1885 que "las tierras vacantes deberían ser consideradas como propiedad del Estado". Aunado a esta expropiación de tierras, desde las primeras exploraciones geográficas patrocinadas por Leopoldo II se habían pactado tratados con algunos jefes locales que erróneamente cedían a los agentes coloniales la "soberanía plena sobre los territorios".[7] De igual forma, el trabajo forzado se legalizó en 1892 con el fin de proveer la mano de obra necesaria para la extracción de caucho y marfil y para las obras de infraestructura requeridas por la economía metropolitana. Todo apuntaba a la instauración de un sistema de explotación basado en el trabajo forzado, en las confiscaciones de las tierras indígenas y en el monopolio estatal de los productos más rentables. (M´Bokolo, 2003: 437)

En esencia, las expropiaciones territoriales y los reclutamiento forzados de mano de obra tuvieron como trasfondo la búsqueda por insertar a las sociedades aldeanas dentro de una dinámica de dependencia y subordinación tanto política como económica. Era el intento por parte del régimen colonial belga por separar a las unidades de producción aldeanas de sus medios de producción.

Por ello desde los primeros días del espacio colonial, las resistencias y respuestas frente a dicho sistema fueron implementadas principalmente por las formaciones sociopolíticas mayormente afectadas: las sociedades aldeanas que desde tales días se

[7] Los jefes africanos habían firmado tales documentos de acuerdo a la larga tradición comercial que tenían con mercaderes, mas no como un tipo de cesión territorial o de soberanía. (Veáse M´Bokolo, 2003: 444)

negaban a someterse a las obligaciones impuestas por el gobierno colonial. Ya desde entonces, como una medida de resistencia, muchas de estas sociedades optaron por desplazarse hacia espacios territoriales en los cuales la autoridad colonial no se había asentado. [8]

Para principios del siglo XX, el grado de violencia y represión por medio de los cuales Leopoldo II y sus principales empresas concesionarias (Unión Minera del Alto Katanga-UMHK; Compañía Ferrocarrilera del Congo-BCK y *Forminiére*) habían logrado enormes dividendos comenzaron a provocar fuertes críticas internacionales que pusieron en tela de juicio la continuidad de la empresa. Los reportes de Edmund D. Morel y, posteriormente, de Roger Casement generaron una fuerte crítica internacional sobre la conducción colonial que Leopoldo II estaba realizando en el Estado Independiente del Congo. Los testimonios recogidos por Casement y publicados en 1903 en un documento titulado "Reporte Casement" sacudieron la opinión pública europea y cuestionaron la benevolencia con la cual supuestamente dirigía a los congoleses.

Una vez que conocieron las informaciones contenidas en el reporte, los Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron un llamado a lo que se denominó "la solución belga", es decir, a la obligación moral que Bélgica tenía para poner fin al tratamiento que los agentes de Leopoldo II estaban dando a los congoleses. Más allá de las obligaciones de índole moral por parte de Bélgica, sugiere Góndola (2002: 77), lo que motivó la intervención del gobierno belga fueron los grandes beneficios económicos que para tales fechas la colonia estaba reportando para Leopoldo II y sus principales socios comerciales. En el año de 1906

[8] En su novela *El Corazón de las Tinieblas*, Joseph Conrad narra algunos episodios que evidencian formas muy tempranas de resistencia social ante los tributos y obligaciones impuestos por las autoridades coloniales. Para un recuento más minucioso y sistemático del tema véase también Isaacman (1990), quien sustenta claramente que, por citar un caso, las protestas campesinas Mbole comenzaron por lo menos desde el año de 1895.

el debate sobre los excesos de Leopoldo II en el Congo se incrementó aún más, de forma que dicho monarca europeo anunció que vendería su posesión colonial al mejor postor. En respuesta, el gobierno belga entró en negociaciones y dos años después recibió la soberanía plena sobre el Congo a cambio de asumir las deudas contraídas por Leopoldo II durante su gestión.

El Congo belga

La administración del Congo cambió muy poco una vez que fue tomada por el gobierno de Bélgica. El reclutamiento forzado se mantuvo a fin de seguir conservando los mismos niveles de producción y de extracción de riquezas[9]. De igual forma, las expropiaciones territoriales que Leopoldo II había realizado a favor del gobierno, se mantuvieron o bien se incrementaron. Así también, las compañías concesionarias como la Compañía de Aceite de Palma del Congo Belga (HCB), la *Forminiere* y otras, continuaron recibiendo gran respaldo por parte de la administración colonial en el reclutamiento de mano de obra y en la adquisición de las tierras más valiosas, aún cuando esto significara el desplazamiento de los habitantes originarios de las aldeas[10].

Como resultado, para 1920, la dominación colonial basada en la explotación de caucho y marfil había logrado crear centros urbanos de gran magnitud apoderándose en la mayor parte de los casos de los territorios en los cuales originalmente se encontraban asentadas unidades de producción aldeanas.

---

[9] Los índices de extracción de marfil alcanzados durante el reinado de Leopoldo II en el Congo (1985-1909) son confirmados por M'Bokolo (2003: 439) para quien la producción en tal aspecto en el periodo que va de 1888 a 1900 pasó de 5,824 Kg., a 330, 491 Kg., respectivamente. La relación en precios por tal producto también experimentaron un incremento de la misma proporción.

[10] El caso de Compañía de Aceite de Palma del Congo belga es elocuente en tal aspecto: "En 1911, a la HCB le fue otorgada una gran área para crear cinco concesiones de palma, cada una de ellas de un radio de 37 millas. En la operación, la HCB desplazó a miles de campesinos y los despojó de sus plantaciones...". (Gondola, 2002: 81)

Además, durante esa década, el mercado mundial de metales registró un breve auge de los precios del cobre. De hecho, el ascenso en el valor del cobre convirtió al Congo en el tercer productor a nivel mundial en dicho metal, además de traer consigo un considerable crecimiento en el sector agrícola "... especialmente en la producción de algodón, aceite de palma, grano de palma, y café". (Gondola, 2002: 85) Es conveniente decir que el incremento en la producción agrícola se alcanzó por medio del trabajo forzado decretado nuevamente por el gobierno belga. Para entonces también la producción agrícola se había orientado hacia el cultivo de cosechas para la venta, con lo cual muchas de las unidades de producción aldeanas redujeron su nivel de autosubsistencia y de autonomía relativa.

Por otra parte, el sector rural continuó siendo gobernado de forma indirecta, esto es por medio de la colaboración de los jefes locales (*chefferies*), designados de manera personal por los administradores coloniales. En este sentido, el gobierno belga continuó con uno de los errores principales del colonialismo europeo: al tratar de establecer contratos con los jefes africanos, el colonialismo no consideró que existían tanto jefes de la tierra como "sacerdotes de la tierra". (Mamdani, 1998: 155-157)

Así, al pactar con sólo una de tales autoridades, el colonialismo convirtió lo que hasta entonces habían funcionado como identidades culturales en identidades políticas. A estas últimas les ratificó los derechos sobre la tierra, negándoselas a las primeras. De esta forma, sobrepuso las identidades políticas sobre las identidades culturales, es decir, sobre las identidades construidas sobre la pertenencia a una cultura común. Se erigió así una distinción política entre "... grupos étnicos, entre los que se consideran indígenas y los que no, y a los primeros les da acceso a derechos considerados de "usos y costumbres", como el derecho al uso de la tierra, mientras que a los segundos se les niegan los mismos derechos". (Mamdani, 2003: 55)

El resultado más palpable fue que los jefes designados por el gobierno colonial carecían de autoridad y legitimidad al interior de los espacios territoriales que supuestamente debían gobernar. Por tal razón, en 1920, el ministro colonial Louis Franck consideraba que el sistema de jefaturas había fallado. Argumentaba que los jefes designados por la colonia carecían de autoridad. Franck reconocía que los medios por los cuales anteriormente los jefes aseguraban la obediencia habían desaparecido. La solución propuesta por Frank, no obstante, fue la creación de unidades administrativas de un tamaño mayor a las jefaturas. Con ello no se lograba otra cosa que reducir todavía más el nivel de autoridad de los jefes designados por el gobierno colonial.

De tal forma, apunta Gongola (2002: 80), para 1933 una administración de índole sectorial se puso en marcha para toda la colonia. El sistema de sectores, no obstante, continuaba con lo que había sido el núcleo del funcionamiento del modelo de jefaturas: las comunidades quedaban bajo control colonial por medio de jefes designados por la autoridad colonial y que carecían del reconocimiento de las poblaciones a las cuales debían gobernar.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX años veinte también pudo observarse la continuación de mecanismos de resistencia por parte de las unidades aldeanas. Para tales fechas, la resistencia africana llegó incluso a incluir movimientos de base cristiana opuestos a la opresión colonial tales como el de Kitawala (La torre vigía), el cual proponía que "Dios era negro y, por lo tanto, no existía nada innato en la segregación racial. Lejos de ello, la segregación racial es el resultado específico de las acciones de los hombres". (Jewsiewicki, 1980: 27)

Esta lucha por conservar la autonomía se mantuvo como una constante por parte de las unidades aldeanas. Las formas de lucha incluyeron, por ejemplo, la práctica de hervir

las semillas de arroz antes de cultivarlas; cortar las raíces de las plantas de café por debajo de la tierra; retardar las prácticas de iniciación de los jóvenes, entre otras.

En síntesis, al igual que durante los años del gobierno leopoldiano, el periodo histórico correspondiente a la dominación belga continuó utilizando el trabajo forzado para la explotación de la minas y la construcción de obras de infraestructura tales como vías férreas y caminos. El sistema de concesiones privadas siguió también funcionando casi sin ningún cambio. Estas compañías continuaron recibiendo el apoyo de la administración colonial en las tareas de reclutamiento de trabajo y en el control de las tierras más valiosas aún cuando esto implicara el desplazamiento de las poblaciones. (Gondola, 2002: 81)

Es cierto que, a cambio del trato preferencial, las compañías concesionarias debían realizar la construcción de servicios normalmente de carácter público, tales como caminos, escuelas y oficinas de correos. De forma que para 1926, el Congo contaba con una gran cantidad de hospitales y escuelas. Sin embargo, lo que a menudo no se menciona es que la construcción de tales servicios implicó también el empobrecimiento de miles de congoleses. Por ello, después de casi 30 años de actividad, las empresas no habían logrado crear ningún desarrollo económico sustancial.

Para finales de 1920, debido a la Gran Depresión, la economía colonial sufrió fuertes estragos ya que los precios del cobre (uno de los bienes esenciales de la economía) cayeron casi un 70%, la economía colonial también se vio fuertemente afectada. No sería sino hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando la producción de cobre, oro y aluminio se volviera a recuperar.

La Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nacionalismo congolés

La segunda confrontación mundial trajo consigo, entre otras cosas, un efecto psicológico positivo para los africanos, ya que los soldados congoleses que lucharon en Europa

regresaron con la idea de haber luchado en contra del racismo. (Coquery-Vidrovitch, 1985: 292) Además, la guerra les permitió ver que los europeos no tenían atributos divinos que los hicieran diferentes a los africanos (Góndola, 2002: 99) Así, una nueva conciencia y una amplia base social actuaron como una fuerza que llevó a la independencia congolesa, el 30 de junio de 1960.

A pesar del éxito del movimiento en favor de la independencia, muy pronto quedó claro que la independencia política no implicaba la independencia económica: en los primeros años de vida independiente los capitales occidentales y belgas, principalmente, comenzaron una política de desestabilización financiera. Con ello también resultaba evidente que la presencia de las grandes compañías comerciales que desde la era leopoldiana habían operado en el Congo seguía muy firme en el Congo Independiente.

La Unión Minera del Alto Katanga (UMHK) estaba controlada por la Sociedad General de Bélgica, una compañía belga que manejaba el 70% de la economía congolesa. (Gondola, 2002: 120) Además, la UMHK tenía el monopolio absoluto de la producción minera en la provincia de Katanga, lo cual significaba que cualquier cambio político en el manejo de esta última afectaría fuertemente la economía belga.

Otras potencias occidentales como Francia, Alemania y los Estados Unidos también dependían fuertemente de Katanga como abastecedora principal de cobre, y temían principalmente que un Congo independiente no garantizaría el aprovisionamiento de materias primas tal como lo había hecho Bélgica. Inicialmente las potencias occidentales confiaron en que un gobierno fuerte y centralizado en manos de Patrice Lumumba bastaría para salvaguardar sus intereses económicos. Sin embargo, las posteriores críticas de Lumumba hacia el paternalismo belga y sus amenazas de un posible acercamiento a la

Unión Soviética conllevaron al abandono de las simpatías iniciales que las metrópolis occidentales habían tenido para con él. (Gondola, 2003: 122)

Capítulo II

EL ASCENSO DE MOBUTU SESE SEKO Y LA LEY DE BARAJIKA

Una vez llegado al gobierno en el año de 1965, Mobutu Sese Seko continuó reproduciendo las estructuras económicas orientadas hacia la exportación que el colonialismo había construido. (Ntalaja, 1989: 293) De esta forma, Mobutu garantizó a Occidente una provisión relativamente segura de materias primas y, a cambio, obtuvo los ingresos necesarios para el mantenimiento del régimen de carácter neopatrimonial.

Más aún, la lógica neopatrimonialista del gobierno de Mobutu prosigió –consciente o inconscientemente– con una de las consignas básicas para el establecimiento de un Estado unitario que desde el periodo colonial se ha puesto en marcha en el Congo, a saber: las políticas de apropiación territorial. Efectivamente, la Ley de Barajika de 1973 "... establece el legítimo derecho del Estado a reclamar toda la tierra y los minerales". (Ntalaja, 1989: 295) La Ley de Barajika no sólo suprimió el derecho ancestral que las poblaciones locales tenían sobre las tierras, sino que fue más lejos que el gobierno colonial ya que establecía como objeto de enajenación no sólo a las tierras "vacantes", sino también a las tierras comunales. Así por ejemplo, con la promulgación de la Ley de Barajika, el gobierno de Mobutu propició que la élite hema (principalmente dedicada a la cría de ganado) se apoderara de las tierras de los lendu (agricultores), mismas que eran consideradas por éstos como ancestrales y en consecuencia inalienables.

La década en la cual fue promulgada la Ley de Barajika se caracterizó porque el sector agrícola fue uno de los más afectados: la producción comercializada se redujo en un 40% mientras que las exportaciones en el mismo rubro cayeron en un 50%. Además, un reporte del año 2002 de la Red Regional de Información Integral (IRIN por sus siglas en

inglés) considera que la Ley de Barajika provocó el desplazamiento de diversas poblaciones campesinas asentadas en la provincia de Ituri.

De manera paradójica, a la par de la implementación de principios legales agrarios que vulneraban los principios básicos sobre los cuales las unidades aldeanas habían operado, Mobutu puso en marcha la política de "autenticidad"[11] o "zaireanización" según la cual la única vía para crear una sociedad progresista y auténtica era el apego a la ética comunitaria característica de las aldeas africanas.

Ciertamente, la "zaireanización" expropió las tierras principalmente de cultivos de plantación que para entonces aún se hallaban en manos de algunas empresas europeas. Sin embargo, las tierras expropiadas no fueron devueltas a los jefes de las aldeas, sino que fueron entregadas a los personajes políticos cercanos al régimen. Las tierras nacionalizadas por el Estado específicamente fueron concedidas a los miembros de la "aristocracia política", es decir a los personajes más cercanos a Mobutu y que conformaron una extensa trama de relaciones neopatrimonialistas. (Callaghy, 1984: 191)

El sistema kalinzi y las nuevas leyes de propiedad: legalidad territorial e ilegitimidad estatal

La creciente exclusión en el acceso a las tierras se evidenció más drásticamente a mediados de 1970, fecha en la cual fue promulgada por Mobutu Sese Seko la Ley de Barajika[12], también conocida como Ley 73-015. Uno de los principales objetivos de dicho marco normativo fue el de establecer una administración uniforme, cuyas estructuras fueran

[11] Como parte de las políticas de "autenticidad", el 27 de Octubre de 1971 el nombre de República Democrática del Congo es sustituido por el de Zaire.

[12] La Ley de Barajika (1973) puede considerarse como un indicador de la continuidad en las políticas que desde el periodo colonial se habían venido implementando en el Congo. La finalidad de la Ley de Barajika tenía como finalidad no sólo la continuación de las expropiaciones territoriales, sino también la creación de un espacio público al interior del cual funcionara un sistema de isonomía legal necesario para el establecimiento del Estado occidental de corte unitario. La Ley de 1973, por tanto, también buscaba socavar las formas de organizar y ejercer el poder propias de las unidades aldeanas.

estrictamente jerárquicas y centralizadas. Como parte de este proceso, el nuevo edicto abolía legalmente las colectividades locales, es decir una categoría administrativa establecida por la colonia y que circunscribía a las jefaturas (*chieftancies*), sectores y centros extra comunitarios (CEC) establecidos durante los años de la colonia.

Hasta la expedición de la Ley de Barajika, el vértice del sistema de jefaturas estaba ocupado, al menos teóricamente, por un jefe seleccionado en concordancia con las leyes consuetudinarias y la tradición y que, en consecuencia, era reconocido formalmente por el Estado colonial. Desde la promulgación de la Ley de 1973, por el contrario, todas las unidades de administración local que hasta entonces habían existido quedaron abolidas. De igual manera, cualquier distinción legal o de rango hasta entonces existente entre las unidades de administración local fue suprimida. (Shatzberg, 1982: 338) Además de lo anterior, la promulgación de Ley de Barajika tendía a socavar de forma profunda el sistema kalinzi por medio del cual se habían regido buena parte de las relaciones sociales y de propiedad de las unidades aldeanas en el oriente congolés.

El kalinzi puede ser entendido más que como un contrato que define los vínculos que subyacen entre una persona y una parcela de tierra, como una institución que otorga legitimidad a una organización social que, en cuanto tal, integra a todas las personas en una red de relaciones de dependencia.

Estas relaciones de dependencia dan lugar a una estructura ordenada y compleja en cuyo vértice se encuentra al Mwami o jefe. El funcionamiento del kalinzi –y la cohesión que tal sistema proporciona al tejido social aldeano– implica que el acceso a la tierra que una persona obtiene conlleve también al reconocimiento y sumisión hacia un tipo de jerarquía en la cual la posesión territorial es simultáneamente un reflejo de la jerarquía

social. "... las relaciones sobre los bienes raíces son también un reflejo de la jerarquía social". (Van Acker, 1989: 6)

De acuerdo con el sistema kalinzi, ningún extranjero podía obtener tierras sin antes haberse reconocido y sometido a la dominación subyacente al kalinzi. Así, "La lógica fundamental del kalinzi [en un periodo de abundancia de tierras] era la extender el territorio bajo la autoridad del Mwami...". (Van Acker, 1989: 6-7)

Por otra parte, hasta antes de la promulgación de la Ley de Barajika, a ningún hombre podía negársele el acceso a la tierra toda vez que aceptara y respetara la estructura y disposiciones jerárquicas del kalinzi. (Van Acker, 1989: 7-8) En suma, el kalinzi, en general, había funcionado sin distorsiones hasta 1973 cuando el gobierno de Mobutu emitió la Ley de Barajika, misma que establecía que todas las tierras –vacantes y/o comunales – pasaban a formar parte del dominio estatal. La promulgación de la Ley de Barajika, continua Van Acker (1989: 8), contribuyó a la exclusión social por medio de dos formas:

1). La nacionalización de todas las tierras anteriormente distribuidas por el gobierno de Kinshasa a los dueños de plantaciones permitió al presidente Mobutu disponer de una mayor cantidad de bienes económicos para distribuirlos, como parte de sus políticas neopatrimoniales, principalmente entre sus protegidos.

2). Favoreció la concentración de tierras en las regiones de Masisi y Rutshuru a manos de los migrantes tutsi de origen ugandés (banyarwanda)[13] quienes a raíz de haber adquirido la

[13] El término banyarwanda hace alusión a las personas del grupo tutsi de origen ugandés. Algunas de ellas habían emigrado inicialmente a Uganda y posteriormente a Zaire. Otras más habían salido directamente de Uganda hacia Zaire.

nacionalidad congolesa por medio de la Ley de Nacionalidad de 1972 obtuvieron también el derecho a tierras. [14]

Contrariamente a lo que sucedió con las tierras expropiadas a los colonos, las grandes empresas transnacionales (Kinaplant y Pharmakina) lograron conservar sus posesiones. El resultado global fue que la forma de producción rural se modificó con la creación de una nueva clase de capitalistas rurales, la cual dominó el espacio social y operó en detrimento de los propietarios tradicionales.

Mobutu Sese Seko y las élites de origen rwandés beneficiadas con la zaireanización (1970)

El hecho de que la política territorial de 1973 se hiciera en Kivu (una zona limítrofe con los países de Rwanda y Burundi) inicialmente amplió el mercado para las cosechas de subsistencia y las de exportación. Un factor más que coadyuvó a esta ampliación inicial del mercado fue que el cambio en la tenencia de tierras comunales o vacantes hacia tierras privadas generó la posibilidad de apropiación de cuasi-ganancias (beneficios económicos producto de una apertura de mercados urbanos y de exportación).

Estas cuasi-rentas se produjeron de dos maneras: 1) Los empresarios agrícolas buscaron maximizar la producción unitaria por medio de una mayor inversión en mano de obra por cada unidad de tierra cultivada, lo cual motivó una necesidad de trabajadores provenientes de las aldeas. 2) Por su parte, las unidades domésticas buscaron participar de los beneficios de las cuasi-ganancias maximizando las unidades de tierra involucradas en la producción.

---

[14] Gracias a las políticas de la zaireanización, los banyamulenge adquirieron las altiplanicies más fértiles de Kivu del norte, Masisi y Rutshuru. Además, pudieron hacerse de más del 90% de las plantaciones coloniales, y algunos de las granjas más grandes. (Van Acker, 2000: 10)

En todo caso, la suma de estos factores llevó a que el valor económico de la tierra se incrementara al igual que las rivalidades por la posesión o propiedad territorial. Además, en razón de las ganancias generadas, nuevos y antiguos actores buscaron hacerse de tierras. Por otra parte, la Ley de 1973 ciertamente, señala Van Acker (2000: 8), creó las condiciones necesarias para integrar a la tierra como uno de los factores de mercado, pero el establecimiento de dicha ley no era una condición necesaria y suficiente para establecer relaciones de mercado. Sólo la transformación del capital social aldeano, directa o indirectamente, en derechos de propiedad podían establecer las condiciones suficientes para el funcionamiento de una lógica de mercado.

Por lo anterior, la demanda de tierras bajo el esquema de propiedad privada coincidió en tales años con la lógica neopatrimonialista del mobutismo – el cual a fin de incrementar los bienes económicos disponibles – descalificó las relaciones de reciprocidad social que habían venido funcionando en las estructuras tradicionales y puso en marcha un nuevo principio de estratificación social y de formación de élites que premiaba las alianzas neopatrimoniales estatales por encima de las tradicionales.

La conversión de tierras comunales en propiedad privada supuso una gran cooperación por parte de algunos de los jefes tradicionales (colaboracionistas)[15]o bami[16], mismos que fueron integrados por Mobutu en la estructura jerárquica del Movimiento Popular de la Revolución (MPR), el partido estatal del mobutismo.

Ciertamente, la integración de estos jefes colaboracionistas en el seno del partido de Estado les confirió un relativo poder de negociación frente al gobierno. Por el contrario,

[15] Vale decir que no todos los jefes tradicionales colaboraron con el neopatrimonialismo mobutista. De hecho, aun en la actualidad se tiene noción de que un buen número de jefes han abandonado sus aldeas.
[16] El término bami responde al plural de mwami o rey. El mwami tradicionalmente era considerado como el guerdían supremo de la tierra. Al respecto, véase Van Acker (2000: 11)

afirma Tull (2003: 436), al ser convertidos en miembros del andamiaje neopatrimonial del gobierno, estos jefes locales socavaron la legitimidad de la cual habían gozado al interior de sus poblaciones ya que utilizaron sus prerrogativas tradicionales para repartir tierras a los oficiales gubernamentales y a los miembros del partido único.

De hecho, al ser incorporados en la estructura del Estado-partido, los jefes colaboracionistas contribuyeron en la modificación del carácter social de la tierra en un activo del capital. Esta transformación del carácter social de la tierra en parte constitutiva del capital económico generó –punto que se aborda más adelante– profundos disturbios en el orden social debido a que condujo a la creciente exclusión de grandes segmentos de la población.

Este proceso de exclusión se exacerbó aún más por el incremento en la densidad poblacional de las mesetas de Kivu del norte, (Tull, 2003: 437) razón por la cual a coincidencia entre la política de expropiaciones territoriales impulsada por Mobutu a partir de la Ley de 1973 y la explosión demográfica de la zona introdujeron fuertes transformaciones en el sistema tradicional agrario. Estos cambios fueron de una naturaleza múltiple: la demanda sobre las tierras fragmentó las unidades territoriales llevando las labores de cultivo hacia las zonas bajas y escarpadas que antiguamente se habían utilizado para pastura y leña. Las tierras cuya condición legal era más segura (aquellas situadas en las zonas aledañas a las granjas) fueron dedicadas a cultivos comerciales de plátano principalmente. (Van Acker, 2000: 18)

Mientras tanto las tierras dedicadas al cultivo de subsistencia quedaron situadas en las partes más alejadas de los centros aldeanos, es decir en las zonas menos seguras. De igual modo, la modificación de las formas tradicionales de tenencia de la tierra condujo a una especie de crisis de integración social de los jóvenes ya que al reducirse la cantidad de

tierra disponible se coartaron también los arreglos tradicionales por medio de los cuales se aseguraba que los hijos herederos varones tenían derecho a una porción de tierra del kalinzi. Muchos de estos jóvenes sin tierra (baginzi) tuvieron que integrase en los cultivos de las bwasa[17], emigrar o participar en actividades mineras y en el contrabando.

Así las cosas, si bien antes de la promulgación de la Ley de Batajika, los inmigrantes habían tenido acceso a las tierras, la escasez de tierra llevó a que las rivalidades territoriales pudiesen ser manejadas 'étnicamente' por los gobiernos en turno.

> "La pertenencia étnica se convirtió en un criterio para juzgar las anteriores asignaciones de tierra, y especialmente aquellas en las cuales las disparidades sociales guardaban también un matiz étnico las condiciones de explosividad social se incrementaron aún más". (Van Acker, 2000: 19)

De este modo, los enfrentamientos de 1993 en Masisi (Kivu del norte) en donde para tales fechas 512 familias de origen rwandés controlaban, gracias al apoyo del régimen mobutista, el 58% de las tierras de la zona pueden verse como consecuencia directa de la aplicación de la Ley de Barajika. (Van Acker, 2000: 19) En suma, la llegada de los refugiados hutu a las provincias de Kivu en 1994, no fue sino otro elemento que acabaría por complicar aún más la ya de suyo álgida presión social, económica y política que afectaba a las poblaciones locales.

La creación y/o el reforzamiento de los enclaves étnicos (grupos locales *versus* grupos de origen rwandés; hutu *versus* tutsi) desembocó en la militarización de la sociedad. Paralelamente, durante los enfrentamientos "étnicos" al interior de la provincia, la mayor

[17] Las tierras bwasa habían sido tradicionalmente usadas para dar cabida a personas que por diversas razones habían dejado sus lugares de origen. Los territorios bwasa, hasta los años de 1970, habían permanecido fuera de los sistemas de tributo del kalinzi. El uso de dichas tierras por parte de los jóvenes indica ya la enorme reducción territorial que había acontecido en el kalinzi como resultado de la Ley de Barajika.

parte de los jefes locales de los grupos socioculturales hunde, tembo y nyanga fueron obligados a huir hacia el interior (Masisi, Walikale) ya que fueron presa de los ataques de las comunidades banyarwanda tales como la Mutualista Agraria de Virunga (*Mutuelle Agricole des Virunga*).

A decir de Tull (2003: 432), el apoyo que Mobutu dio a las élites banyarwanda no se tradujo en desafíos hacia el Estado por parte de estos últimos, sino que más bien lo que surgió fue una fuerte lucha entre las poblaciones locales y los banyarwanda por los recursos distribuidos por el Estado. El sistema funcionaría siempre que Mobutu conservara los medios económicos necesarios para seguir controlando a las poblaciones. Empero, una de las primeras expresiones que dieron cuenta del agotamiento del neopatrimonialismo de Mobutu fueron los alzamientos del propio ejército zairense en 1991.

Además de los disturbios generados por los levantamientos de las milicias zairenses, un segundo indicador de la erosión del neopatrimonialismo estatal fueron las disputas entre grupos locales y las comunidades banyarwanda de inicios de los años noventa. "En este contexto, la manipulación que Mobutu [había hecho] con respecto a la tierra y a la nacionalidad, misma que había sido parte fundamental de la política de divide e impera, se hizo más evidente". (Tull, 2003: 433)

Como consecuencia, tanto las poblaciones locales como los banyarwanda cobraron simultáneamente la noción de que el Estado estaba alineándose con el grupo enemigo. Así, en la medida en la que la ambos grupos se sintieron mutuamente amenazados, la provincia de Kivu empezó a escapar al control gubernamental y a conformarse como un espacio propicio para la aparición del fenómeno de los señores de la guerra y para la formación de enclaves dirigidos por países extranjeros. (Reno, 1998: 147) De esta forma, aunque los problemas del régimen mobutista estaban ya presentes en 1992, no fue sino hasta 1996 (con

la destrucción de los campos de refugiados hutu en el Zaire oriental a manos del Ejército Patriótico Rwandés), cuando adquirió un carácter concluyente.

> "Tomó solamente seis meses para que la pobremente equipada y dirigida coalición anti-mobutista alcanzara las puertas de Kinshasa demostrando la debilidad de las Fuerzas Armadas de Zaire, antes que la fuerza de la AFDL". (Lemarchand, 2003: 33)

Hasta entonces, uno de los principales sustentos del régimen mobutista habían sido las aportaciones en dinero de los países a los cuales les convenía mantenerlo en el poder. De hecho, fue el manejo neopatrimonial de estos recursos lo que le permitió a Mobutu lograr una base social que por medios políticos era incapaz de alcanzar. En consecuencia, una vez terminada la guerra fría, y que el patrocinio económico de las potencias capitalistas le fue retirado, el régimen mobutista quedaba prácticamente destinado a morir. Así, los ataques y la destrucción de campos de refugiados hutu en Zaire oriental perpetrado en 1996 por el Ejército Patriótico Rwandés no hicieron otra cosa más que acelerar el colapso de un gobierno que carecía de la capacidad y la legitimidad interna para lograr un adecuado nivel de lealtad política por medio de otras vías que no fuesen la asignación de recursos económicos.

El colapso del Estado neopatrimonialista

Si bien fue a finales de la década de 1990 cuando el colapso del Estado neopatrimonialista de Mobutu Sese Seko se hizo evidente, desde finales de los años 1970 los principales indicadores financieros mostraban que la economía zairense estaba en estado de coma: la deuda externa había llegado a 5 billones de dólares. Ante tal contexto, Mobutu tuvo que ceder ante las reformas propuestas por los organismos financieros internacionales (incrementar los ingresos estatales y reducir los gastos del gobierno), es decir una serie de

politicas que socavan las bases neopatrimonialistas del gobierno mobutista. (Moore, 2001: 919)

En los años siguientes la crisis se profundizó todavía más: la inflación sobrepasó el 100%, el déficit presupuestario se agravó y la deuda externa llegó a 10 billones de dólares. (Gondola, 2002) Las medidas del FMI fracasaron ante la resistencia del neopatrimonialismo mobutista en el cual los líderes consideraban los ingresos estatales como ingresos propios. Esta persistencia del neopatrimonialismo zairense desembocó en que durante 1990 el FMI declarara a Zaire como un Estado que no cumplía con sus compromisos crediticios. Con ello, el régimen zairense perdía la credibilidad y confianza de cualquiera de los acreedores.

En tal contexto apareció clandestinamente en Zaire un partido de oposición (Unión por la Democracia y el Progreso Social-UDPS) encabezado el entonces secretario de gobierno del régimen mobutista, Étienne Tshisekedi. Dicho partido sufrió la represión gubernamental hasta 1990, fecha en que logró acaparar un fuerte apoyo popular en contra de Mobutu. También la Fuerzas Armadas de Zaire jugaron su papel importante en la caída de Mobutu: el ejército zairense había sido parte esencial del gobierno de Mobutu, pero la creación del Movimiento Popular de la Revolución (MPR) alejó a gran parte de los líderes militares, quienes desconfiaban del gobierno civil y a los cuales –acostumbrados a participar en política– no les agradaba que el MPR tuviera el monopolio de la participación política[18].

[18] En efecto, fundado en 1967, el MPR se constituyó como partido de Estado y, en consecuencia, subordinó a todos los órganos estatales a los designios del Comité Central del Partido – en cuyo vértice se encontraba Mobutu– que era considerado como el "depositario del mobutismo" y de las "fuerzas vivas de la nación". Así, a través del partido de Estado fueron el mobutismo marginalizó a la oposición política, el Parlamento y el Ejército. A partir de dicha subordinación el presidencialismo mobutista se convirtió en una verdadera monarquía absoluta: (Willame, 1992: 17; 39-44)

Hasta los primeros días de 1990, Mobutu manejó hábilmente por medio de la rotación de puestos las tensiones intramilitares que la incorporación del ejercito zairense en el organigrama del MPR habían ocasionado. Además los puestos claves siempre fueron dejados en manos del grupo étnico al que pertenecía Mobutu, los ngbandi. Sin embargo, con la aceleración de la crisis económica, la tropa zairense también vio reducidos sus ingresos. Ante tal situación interna y externa, Mobutu se vio en 1990 en la necesidad de terminar con el régimen de partido de Estado e iniciar un proceso de "reforma política" y una apertura a favor un proceso multipartidista lanzando una convocatoria para la realización de la Conferencia Nacional Soberana (CNS). Esta última se reunió en Kinshasa en 1991 y logró reunir a cerca de 3,400 representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil.

En la CNS la habilidad de Mobutu para librarse de los sectores opositores y apoyar con dinero el nacimiento de facciones amigas se hizo evidente. De tal modo, la CNS desembocó en la creación de más de 200 partidos políticos. Fuertes sumas de dinero se canalizaron a la creación de partidos satélite, que funcionaron como comparsa del partido de Estado. La política de *divide et impera* aplicada por Mobutu consiguió alinear a ciertas fuerzas promobutistas en regiones como Shaba en donde la Unión de Federalistas Republicanos Independientes (UFERI) fue creada como principal oponente de la UDPS de Tshikedi.

Nuevamente el asunto de la ciudadanía congolesa y del acceso a la tierra que de ello se desprendía fue manipulado por el gobierno de Mobutu: en Kivu del sur, grupos promobutistas de orígen Bemba negaron los derechos de los banyamulenge. También en Kivu del norte, los 59s de origen tutsi (refugiados que habían colaborado la revolución de Rwanda en 1959-1962) fueron señalados como extranjeros que trabajaban para el Frente

Patriótico Rwandés (RFP). A su vez, la falta de representación para los banyamulenge ante la CNS propició duros enfrentamientos contra los "congoleses nativos" de forma que en el año de 1993 Kivu del norte estaba hundido en una aparente problemática étnica que, no obstante, tenía como trasfondo el acceso a la tierra.

Algo similiar aconteció en Shaba y Kivu del Norte, en donde se desataron enfrentamientos entre grupos mobutistas y no mobutistas. "En Shaba, los esfuerzos del gobernador pro-UFERI, y que buscaba con ello consolidar su dominio sobre las instituciones provinciales desembocaron en asesinatos en masa en contra de las poblaciones de Kasai, principalmente inmigrantes Luba..." (Lemarchand, 2003: 39)

La efervescencia levantada por la CNS y el genocidio predominantemente tutsi en Rwanda durante el año de 1994 prepararon el camino para la llegada en el año de 1997 a la presidencia de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire (AFDL), encabezada por Laurent Kabila e impulsada fuertemente por el gobierno rwandés que llegó al poder en 1994.[19]

Sin embargo, a pocos días después de haber derrocado al Mobutu, Laurent Kabila abandonó sus iniciales consignas democráticas: la CNS fue excluida de los temas políticos por tener un pasado mobutista y los partidos de oposición fueron prohibidos nuevamente. De esta forma, asegura Lemarchand (2003), con el paso del tiempo, el apoyo del gobierno rwandés hacia Laurent Kabila quedó completamente al descubierto ya que la mayoría de los puestos de gobierno de L. Kabila fueron dejados en manos de personajes de origen tutsi.

[19] De hecho, el apoyo rwandés hacia L. Kabila y a la AFDL no sólo buscaba derribar a Mobutu, sino también –por medio de la ocupación militar– convertir a la frontera oriental congolesa en un sitio seguro para Rwanda. De manera simultánea, la ocupación militar también serviría para establecer enclaves armados cuya finalidad era extraer de forma ilegal los recursos minerales y congoleses.

A consecuencia de ello, el sentimiento antitutsi se incrementó en Kinshasa y la popularidad inicial de L. Kabila se redujo progresivamente.

Para complicar el panorama aún más, en 1998 L. Kabila tomó una decisión que demostró ser catastrófica para su régimen. L. Kabila anunció que todas las tropas extranjeras rwandesas serían expulsadas del Congo. Con tales declaraciones, L. Kabila tácitamente daba la espalda al gobierno de Rwanda que lo había apoyado en el golpe en contra de Mobutu. Hasta antes de tales declaraciones de Laurent Kabila, las poblaciones tutsi de la zona oriental de Zaire –al igual que los gobiernos de Uganda, Rwanda y Burundi– consideraban que la presencia de las milicias rwandesas en Zaire les daría una mayor seguridad y protección en contra de grupos militares hutu que habían huido hacia la margen oriental zairense en 1994.

En apoyo a este viraje político de Laurent Kabila, los gobiernos de Zimbabwe, Angola, Chad y Namibia desplegaron tropas en la parte nororiental de la RDC. Rwanda y Uganda, ahora enemistados con Laurent Kabila, dieron respaldo a dos movimientos rebeldes: la Unión Congolesa para la Democracia (RCD) y el Movimiento de Liberación del Congo (MLC). Como consecuencia, unos meses más tarde, el RCD –conformado principalmente por tutsis– lograba controlar una tercera parte del territorio congolés. (*The Economist*, 4.VII.2002)

Posteriormente, nuevos estallidos de violencia entre los grupos hutu y tutsi en la zona oriental zairense fueron utilizados para extender el conflicto a otros grupos como los lendu y los hema. Es decir, Laurent Kabila –al igual que lo había hecho su antecesor– incentivó las rivalidades étnicas y continuó con una política que se ha perpetuado a lo largo de la vida colonial e independiente de la RDC, a saber: la superposición de identidades políticas por encima de las identidades étnicas.

Los territorios orientales del Congo: la tierra y la constante superposición de identidades

La inestabilidad de las provincias de Kivu tiene un origen que data de los años de la colonia, fecha en la cual se favoreció la inmigración de familias rwandesas a la zona con el fin de tener mano de obra para las plantaciones. Así, aunque los conflictos violentos acontecidos en la zona este del Congo en 1996 se presentan como el detonante en la caída de Mobutu, lo cierto es que desde muchos años antes Kivu nororiental se había convertido en un problema para el gobierno del entonces Zaire.

Durante sus días como presidente, Mobutu había continuado con la política colonial de superposición de identidades: inicialmente dio el respaldo político a los tutsi (específicamente a los refugiados rwandeses tutsi que habían huido de la revolución de 1959). Pocos años más tarde Mobutu invierte dicha política y expide la Ley de nacionalidad de 1981 que designaba a los banyarwanda como extranjeros y, como tales, les negaba el acceso a tierras y a los derechos políticos. De hecho, hasta los primeros días de los ochenta, los banyarwanda habían tenido acceso a los derechos políticos y a la compra de tierras.

En consecuencia, para el año de 1981 el problema del acceso a la tierra y la concesión o negación de la nacionalidad eran dos caras de la misma moneda. Eran la resultante de un esquema exclusivista de derecho que negaba las formas de tenencia múltiples sobre la tierra que el gobierno colonial había instaurado y que el régimen independiente había continuado.

Por otro lado, muchos banyarwanda creyeron que el problema se solucionaría con la realización de la Conferencia Nacional Soberana de 1990 en el marco de apertura democrática que el gobierno de Mobutu convocó a principios de 1990. La solución

esperada por los banyarwanda, no obstante, nunca llegó ya que, al ser considerados como "extranjeros", no pudieron participar en las discusiones de la Conferencia. Posteriormente, durante el año de 1993, señala Lemarchand (2003), la violencia en contra de los banyarwanda se incrementó todavía más. Por esta razón, entre otras, muchos tutsi de Kivu del norte y del sur se unieron a las Fuerzas Patrióticas de Rwanda (RPF).

El conflicto hutu-tutsi tuvo su momento más álgido en 1996, fecha en la cual el gobernador de Kivi del sur urgió a todas las personas de origen tutsi a dejar el país o enfrentar las sanciones. Una semana más tarde las tropas del RPF desataron toda su fuerza sobre los campos de refugiados. De tal forma:

> "En 2001, al menos seis Estados estaban militarmente involucrados, ya fuera oficial o inoficialmente: Rwanda, Uganda y Burundi estaban del lado de los rebeldes, y Angola, Zimbabwe y Namibia al lado del gobierno de Joseph Kabila en Kinshasa". Lemarchand (2003: 30)

Un año más tarde, la mitad del territorio congolés estaba bajo el dominio de movimientos rebeldes patrocinados mayoritariamente por los gobiernos de Rwanda y Uganda. A cambio del apoyo militar, los grupos rebeldes establecieron una economía de guerra que permitía a los gobiernos que los respaldaban en la extracción clandestina de recursos minerales del territorio congolés.

De los enclaves económicos hacia el fenómeno de los señores de la guerra (*warlordism*)

Si bien algunos estudios realizados en las provincias de Kivu consideran a la crisis humanitaria de Rwanda en 1994 como una de las causas de los problemas que actualmente aquejan a la región oriental del Congo, hay que decir también que es conveniente examinar los problemas de exclusión social generados a partir de la limitaciones que tanto en la

época colonial e independiente los gobiernos han generado en el acceso a la tierra. De hecho, sostiene Van Acker (1989: 5), la historia de las provincias de Kivu ha tenido como constante la creciente reducción en la disponibilidad de las tierras. El problema de las provincias de Kivu radica en que las relaciones normativas que han buscado organizar el espacio territorial han tendido a incrementar la incertidumbre y a excluir progresivamente a un mayor número de personas.

Los problemas de inestabilidad que desde 1995 enfrentan las provincias de Kivu del Norte y Kivu del sur, al igual que la escasa e ilegitima presencia estatal en la zona son normalmente presentados por diversos analistas como consecuencia de la crisis humanitaria de Rwanda 1994 y/o de la guerra de 1998. Sin embargo, tanto la ilegitimidad estatal como la inestabilidad de la región tienen causas mucho más antiguas, a saber: la búsqueda por instaurar un Estado de corte unitario al interior del Congo condujo al gobierno colonial y, posteriormente, a los gobiernos independientes a implementar una gama de políticas de apropiación del espacio territorial sobre el cual las aldeas organizaban y legitimaban sus estructuras de poder.

Así por ejemplo, durante el periodo mobutista, la nacionalización de las tierras comunitarias no sólo tuvo como objeto incrementar los activos económicos en manos del Estado para continuar con el sistema neopatrimonialista, sino también establecer los límites dentro de los cuales la autoridad y el poder estatales debían ser ejercidos para crear nuevos ambientes políticos y económicos. (Newbury,1986: 88)

La construcción de este tipo de Estado unitario y capitalista se enfrentó con las formas de organización social, económica y política propias de las formaciones sociales aldeanas para las cuales la tierra no sólo representa el núcleo integrador de las relaciones sociales, sino que también resulta una pieza clave para dar forma al capital social –esto es

el nivel de confianza generalizada y de apego hacia las normas de reciprocidad– característico de las relaciones intra-aldeanas. (Van Acker, 2000: 3) Dicho de otra forma, la promulgación de la Ley de 1973 funcionó como un poderoso instrumento para transformar las estructuras sociales de Kivu por medio de dos elementos:

a) Al descartar a la ley consuetudinaria como fuente legítima de derechos territoriales, la Ley de 1973 no sólo introdujo la posibilidad de formar grupos sociales sin tierras y sin derechos, sino que también dejó sin estatus legal aquellas tierras adquiridas consuetudinariamente institucionalizando la incertidumbre sobre qué grupo social tenía la posesión o propiedad sobre tales o cuales tierras.

b) La ley creó la posibilidad de transformar los activos económicos (tierras comunales y concesionarias) en activos políticos con el fin de recompensar a los clientes leales políticamente al Estado. La consecuencia más palpable de las políticas territoriales fue la progresiva formación de "enclaves" territoriales que buscaban escapar de la autoridad estatal.[20]

En efecto, las políticas de expropiaciones territoriales llevaron, inicialmente, a la aparición de enclaves económicos en la región oriental del Congo dominados por los personajes cercanos al mobutismo. Muchos de estos miembros de la "aristocracia política" –a consecuencia de las expropiaciones territoriales– sustituyeron a las élites comerciales que históricamente habían usufructuado el comercio transfronterizo característico de la región.

[20] La liberalización de la minería minera en Kivu en 1982 tuvo un fuerte efecto sobre la estructura social ya que conformó un grupo de personas que dependieron del mercado para solventar sus necesidades de subsistencia. De hecho, una masa de migrantes jóvenes tuvo que viajar hacia ciudades fronterizas en las cuales el oro era enviado hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, una vez que el Estado neopatrimonialista se colapsó, el comercio transfronterizo se militarizó y la "aristocracia" mobutista fue sustituida por nuevos señores de la guerra, esta vez patrocinados por Rwanda y Uganda mayoritariamente. Por otra parte, como forma de conservar su autonomía económica y política frente al Estado, algunas poblaciones campesinas siguieron realizando actividades trans-fronterizas cuyos beneficios económicos escapan de los mecanismos de tasación estatales.

De tal modo, mientras el Estado unitario capitalista reclama para sí la lealtad política exclusiva y la integración de sus gobernados en estructuras de dependencia económica de tipo clasista, tanto los señores de la guerra como las sociedades aldeanas se involucran e interrelacionan en actividades o en redes de economía secundaria que funcionan fuera de la orbita económico-política del Estado. En ambos casos, tal como sostiene Newbury (1986: 93), la legitimidad del Estado es puesta en tela de juicio: "En la medida en que la continuidad a largo plazo del poder estatal depende de la extracción del plusvalor o de bienes esenciales..., la legitimidad a largo plazo del Estado es puesta en entredicho".

De lo anterior resulta que es imposible hablar de la posesión de un monopolio coercitivo legítimo por parte de Estado ya que las actividades económicas y políticas de los señores de la guerra (*warlords*) operan fuera del espacio público estatal. Lo mismo puede decirse de gran parte de las actividades económicas de las aldeas, las cuales al insertarse en redes de comercio secundario, no sólo escapan del dominio estatal, sino que además conservan un cierto grado de autonomía frente al Estado.

El funcionamiento económico y político propio de las provincias de Kivu en la República Democrática del Congo es un caso paradigmático de lo anterior: la mayor parte de su franja oriental se halló, a partir de 1994, ocupada por tropas apoyadas por los

gobiernos de países extranjeros, y/o por líderes de movimientos rebeldes o bien por señores de la guerra que han establecido una especie de "feudos privados" y que controlan un buen porcentaje de actividades económicas que no reportan ingresos a la autoridad estatal congolesa. Por su parte, un gran número de las actividades comerciales aldeanas se realizan fuera del espacio estatal. En suma, "El Estado permanece como uno entre muchos actores que compiten en la arena social y política por reglas, intereses y recursos". (Tull, 2003: 432)

En síntesis, la creciente expropiación de tierras que –ante el final de la guerra fría y la pérdida del apoyo económico proveniente de las potencias occidentales- Mobutu llevó a cabo con el objetivo de seguir asegurándose la lealtad política de sus allegados incrementó aún más los conflictos entre grupos socioculturales de la región por la tenencia de la tierra y por el control de las rutas comerciales transfronterizas[21]. Además de lo anterior, la crisis humanitaria de Rwanda en 1994 y los flujos de refugiados hutu acentuaron la presión sobre las tierras, todo lo cual se interrelacionó para dar como consecuencia el colapso del Estado neopatrimonialista y la aparición de una economía militarizada encabezada por señores de la guerra, muchos de los cuales encabezan movimientos armados de oposición al gobierno nacional.

[21] Según afirma Reno (1998: 159) a principios de 1990 Mobutu había concedido a seis de sus unidades militares personales plena libertad para manejar y usufructuar el comercio paralelo.

Capítulo III

LAS PROVINCIAS DE KIVU DEL NORTE Y DEL SUR, GRUPOS REBELDES Y GOBIERNO NACIONAL: ¿FRAGMENTACIÓN O INCREMENTO DEL PODER ESTATAL?

Una vez distanciado del gobierno rwandés, Laurent Kabila buscó la firma de diversos acuerdos tendientes a lograr la pacificación y la estabilidad política en el Congo. El primero de ellos fue el Acuerdo de Paz de Lusaka firmado en agosto de 1999 con las diferentes ramas en las cuales se había fraccionado la Agrupación Congolesa para la Democracia, a saber: la RCD-Goma y la RCD-Movimiento de Liberación. El Acuerdo de la ciudad de Lusaka comprometía a los gobiernos del Congo, Zimbabwe, Angola, Namibia, Uganda y Rwanda a concluir las hostilidades armadas.

Pese a la firma de los documentos de pacificación, las hostilidades continuaron ya que cada una las facciones y países implicados se culparon mutuamente de no respetar los textos de Lusaka. Más allá de la realidad de las acusaciones, lo cierto es que la incapacidad del gobierno congolés para establecer una autoridad efectiva y legítima en todo su territorio desembocó en una especie de *modus vivendi* para Rwanda y Uganda.[22]

De hecho, los informes informes de Naciones Unidades evidencian que desde antes de su llegada a Kinshasa, Laurent Kabila pactó con los gobiernos de Rwanda y Uganda contratos no escritos para explotar las riquezas del Congo. (ICG, 2000) Por medio de estos acuerdos secretos Kabila preservó la economía de guerra que se había gestado a raíz del colapso del gobierno de Mobutu. Al respecto, señalan Vlassenroot y Romkema (2004: 3), una vez que el apoyo económico internacional dejó de fluir a las manos de Mobutu, "... se

[22] Rwanda ha incrementado sus exportaciones de diamantes (un mineral que no existe en tal proporción en Rwanda) de 720, 000 a 1,788,000 dólares en el periodo que va de 1997 a 2000. (UNSC, 2001)

conformaron nuevas redes militarizadas para la extracción de los beneficios económicos". Estas redes comerciales militarizadas se consolidaron con el flujo de refugiados hutu provenientes de la crisis humanitaria de Rwanda en 1994 y, posteriormente, con los ataques rwandeses a los campos de refugiados en 1996. A partir de entonces, continúan Vlassenroot y Romkema (2004: 3), las relaciones sociopolíticas neopatrimonialistas por medio de las cuales Mobutu había buscado integrar a Kivu del norte y Kivu del sur en la dinámica estatal congolesa se convirtieron en una disputa militar regional por el control de los recursos de las provincias.

En razón de estos acuerdos secretos y de la economía de guerra que ellos implicaban, Laurent Kabila no sólo no buscó inicialmente modificar la configuración de las élites que controlaban el comercio transfronterizo, sino que tampoco realizó cambios tendientes a resolver la ambigüedad legal de la tenencia y propiedad de la tierra. A cambio de los pactos establecidos con los gobiernos de Rwanda y Uganda, Laurent Kabila pudo financiar los gastos de guerra generados en la campaña a favor del derrocamiento de Mobutu.

> "Los tratos que [Laurent Kabila y su AFDL] y frecuentemente las recién creadas compañías mineras internacionales, mismas que básicamente remplazaron a las anteriores relaciones establecidas entre los protegidos de Mobutu y un selecto grupo de inversionistas extranjeros, pueden ser vistas como la consolidación del sistema económico anterior a la guerra [de 1994]". De esta manera, nuevas élites militares y comerciales tomaron el control de las actividades que hasta entonces habían estado en manos del círculo mobutista. (Vlassenroot y Rokema, 2004: 8)

El problema mayor sobrevino cuando, una vez que ocupó la presidencia del Congo, Laurent Kabila tuvo que enfrentar la efervescencia social que cuestionaba la inclinación del

gobierno hacia el grupo tutsi. Ante esto, *Mzee* Kabila decidió limitar la influencia de los concesionarios rwandeses y ugandeses. En efecto, un discurso radial de 1998, emitido por Ministro de Minas del gobierno de Kabila acusó a los gobiernos de Rwanda y Uganda de fomentar las prácticas de economía de guerra en las provincias de Kivu del norte y Kivu del nur y en distrito de Bunia. En respuesta, a las declaraciones del Secretario de Minas, los gobiernos de Rwanda y Uganda (ahora buscando derrocar a Laurent Kabila) prepararon una nueva invasión, esta vez apoyando a la Agrupación Congolesa para la Democracia (RCD)[23]. Desde entonces hasta el año 2001 (fecha en que Laurent Kabila fue asesinado), casi dos terceras partes del territorio congolés quedaron ocupadas por grupos militares de extracción rwandesa y/o ugandesa.

Joseph Kabila: compartir el poder o el territorio

A principios del año 2001, Laurent Kabila fue asesinado por uno de sus mismos guardaespaldas. Para Lemarchand (2003: 51), el asesinato de *Mzee* Kabila tiene su explicación en que ahí "Donde Mobutu se rehusó a compartir el poder y resistió la ruptura estatal, Kabila prefirió compartir el país antes que compartir el poder".

Laurent Kabila fue sucedido por su hijo Joseph Kabila, quien el 22 de Julio de 2002, en compañía del gobierno rwandés, logró la firma del Acuerdo de Pretoria en el cual Rwanda se comprometía a retirar a sus 20,000 efectivos desplegados en territorios congoleses. La RDC, en reciprocidad, también prometía desmantelar las milicias hutu rwandeses (Interhamwe) que habían participado en el genocidio en Rwanda de 1994.

[23] El RCD posteriormente se fraccionó en tres ramas principales, a saber: RCD-Goma; RCD-K/ML (Kisangani /Movimiento de liberación. Apoyado por Uganda); y RCD-N (Nacional). Estas dos últimas facciones están integradas en el gobierno de transición encabezado por el hijo de Laurent Kabila, Joseph Kabila.

Zimbabwe y Uganda también llevaron a cabo un retiro de sus tropas acantonadas en el espacio territorial congolés.

> "A pesar del compromiso de paz del 16 de diciembre del 2002 y del acuerdo para establecer acuerdos transitorios tendientes a la realización de elecciones libres y justas, el conflicto entre el gobierno y las fuerzas rebeldes continuó en la parte nororiental de la República Democrática del Congo (RDC)". (GS, 2003)

Una nueva ronda de negociaciones se hizo entonces necesaria. Esta vez el gobierno congolés, el Movimiento para la Liberación del Congo, la Agrupación Congolesa para la Democracia, Agrupación Congolesa para la Democracia-Movimiento de Liberación, la Agrupación Congolesa para la Democracia-Nacional, la oposición política, y los mai-mai[24] se sumarían el 17 de diciembre del 2002 a lo que se dio por llamar Diálogo Intercongolés. Este último proponía el cese de hostilidades y un periodo de transición política que habría de concluir con la realización de elecciones presidenciales y legislativas en 2005.

El Diálogo Intercongolés finalmente desembocó con los Acuerdos de Sun City de abril de 2003, los cuales proponen un gobierno de unidad nacional amplia. En concordancia con el Dialogo Intercongolés, Joseph Kabila y los cuatro vicepresidentes de la República que actualmente conforman el poder ejecutivo han jurado guardar la llamada Constitución de la Transición promulgada el 4 de abril del 2003. No obstante la conformación del nuevo gobierno de transición, las hostilidades en la zona nororiental congolesa no han concluido. De hecho, muchas facciones rebeldes no se han unido al gobierno de transición. Tal es el

[24] Los mai mai es el nombre de un grupo rebelde armado compuesto por congoleses que se oponen a la inmigración rwandesa. Por su parte, la oposición política esta actualmente liderada por Arthur Z´Ahidi Ngoma (uno de los cuatro vicepresidentes del gobierno de transición) y se concibe así mismo como un movimiento pacífico de oposición a Laurent Kabila.

caso de algunos líderes que se han desprendido de la Agrupación Congolesa para la Democracia-Goma (RCD-Goma).

Por otro lado, conviene señalar que la Constitución de Transición promulgada en 2003 deja intacta la problemática que ha resultado a raíz de la búsqueda por instaurar un Estado unitario: las expropiaciones territoriales generaron una ambigüedad legal entre las formas consuetudinarias de tenencia tradicional y la formas de propiedad privada de la tierra. Al dejar sin resolver este asunto, la Constitución de Transición de 2003 sigue propiciando el fenómeno de los señores de la guerra, el cual tiene uno de sus principales pilares la ambigüedad legal de la tierra, la ilegitimidad y la incapacidad estatal en la zona. El marco jurídico de la transición tampoco plantea ninguna solución "... la crisis de la legitimidad del Estado y del poder". (Tshiyembe, 2003)

La firma de los distintos acuerdos de pacificación que desde el año 2001 han sido logrados por Joseph Kabila[25] y que han desembocado en la integración de los líderes de las MLC; RCD-ML y la RCD-N en un gobierno de unidad nacional no pueden ser considerados como un elemento que impulse la capacidad y el control estatal en la zona nororiental del territorio congolés. Por el contrario, la integración de antiguos líderes rebeldes como vicepresidentes del actual gobierno de unidad nacional parece representar una mayor fragmentación y no un incremento de la ya de suyo incipiente capacidad estatal del gobierno presidido por Joseph Kabila.

[25] Desde su llegada a la presidencia de la República Democrática del Congo en 2001, el gobierno de Joseph Kabila logró retomar las negociaciones de paz iniciadas con los Acuerdos de Lusaka del año de 1999. De igual manera, Joseph Kabila negoció las firmas de los Acuerdos de Pretoria y Luanda de 2001. Las negociaciones de paz finalmente desembocaron en los Acuerdos de Sun City, mismo que dieron paso al denominado Diálogo Intercongolés, a la conformación de un gobierno de unidad nacional y a la preparación de un proceso electoral que ha concluir en elecciones presidenciales en 2005.

La conformación del gobierno de transición tampoco permite observar un incremento de la legitimidad gubernamental al interior de los territorios controlados por grupos rebeldes a raíz de la crisis humanitaria de Rwanda en 1994.

De hecho, la participación de los líderes –anteriormente en rebeldía– en el gobierno de Joseph Kabila sólo ha conllevado a que los territorios que antiguamente habían estado controlados por los rebeldes hayan caído en manos de nuevos líderes que casi inmediatamente han ocupado los espacios de poder y autoridad liberados por los líderes firmantes de los Acuerdos de Sun City en 2003. De igual forma, Rwanda y Uganda han optado por nuevas vías de control de los territorios que hasta 2003 habían estado en manos de sus respectivos ejércitos nacionales.

Así las cosas, sin importar las negociaciones y los intentos de pacificación que el gobierno de Joseph Kabila ha implementado, los territorios en rebeldía aún se hallan fuera de la esfera de autoridad estatal congolesa. Además, a pesar de que los acuerdos de pacificación establecieron el retiro de tropas rwandesas, Rwanda continúa controlando las provincias de Kivu por medio de estrategias que no necesariamente requieren de la presencia de efectivos militares rwandeses en la zona.

Por todo lo anterior, cabe preguntarse si, a principios del año 2004, la inserción del MLC; RCD-ML y la RCD-N en el seno del gobierno de unidad nacional ha logrado traducirse en un mayor control por parte de la autoridad estatal sobre las regiones ocupadas por las milicias armadas. Más aún se debe averiguar si la incorporación del MLC; RCD-ML y la RCD-N en el seno del gobierno de unidad nacional conformado en el año del 2003 ha llevado a un incremento de la autoridad estatal y/o a una mayor legitimidad por parte del gobierno nacional congolés al interior de los territorios ocupados.

Los acuerdos de la transición y los nuevas prácticas de los señores de la guerra

El gobierno de unidad nacional presidido por Joseph Kabila ha logrado actualmente la participación *de jure* de los líderes del MLC; RCD-ML y la RCD-N[26]. Pese a lo anterior, *de facto*, el involucramiento de los líderes de dichos grupos armados no ha traído consigo un incremento del control de la autoridad estatal congolesa sobre los territorios ocupados. Más bien, la conformación del gobierno de unidad nacional ha conducido a que nuevos personajes estén usufructuando el vacío de poder dejado por los jefes pactantes en las provincias ocupadas. Tal es el caso de Mbusa Nyamwisi –personaje de origen nande y líder del RCD-ML– quien actualmente funge como Ministro de Cooperación Regional del Gobierno de la Transición y que hasta antes de los Acuerdos de Sun City había logrado reducir la oposición de los mai-mai, para incorporar a los grupos vurundo, mudohu y La Fontaine.

> "Los territorios de Beni y Lubero en Kivu del Norte están casi exclusivamente habitados por la comunidad nande. Estos últimos se hallaron bajo la influencia de Uganda después de la fisura del RCD en mayo de 1999 y poco después se convirtieron en la base de operaciones del líder de la RCD-K/ML, Mbusa Nyamwisi. Siendo nande, Nyamwisi buscó beneficiarse de la legitimidad de su hermano muerto en 1993, misma que estaba basada en credenciales antimobutistas". (ICG, 2003: 19)

Sin embargo, a raíz de la firma de los acuerdos de Sun City y de su partida hacia Kinshasa, Nyamwisi abandonó los territorios que habían estado bajo su control para dejarlos en manos de nuevos líderes rebeldes. De hecho, la ausencia de la autoridad

[26] El MLC, apoyado por el gobierno de Uganda, ocupaba aproximadamente hasta 2002 las provincias Oriental y Ecuador de la República democrática del Congo. La RCD, que en 1999 se fisura en RCD-Goma y RCD-ML, logró ocupar para 2002 las provincias de Kivu del norte, Kivu del del sur, Maniema, Kasai oriental y la porción norte de Katanga.

representada por Nyamwisi ha renovado antiguas disputas territoriales entre las subdivisiones banande (ICG, 2003: 19).

Hasta el momento de su adhesión al gobierno de transición en Kinshasa, Nwawisi había logrado relativamente cooptar a algunos elementos que conforman las milicias mai-mai, al igual que logró echar abajo ciertos acuerdos comerciales que Uganda había puesto en marcha con otros grupos rebeldes de la zona. En consecuencia, la conformación del gobierno de unidad nacional encabezado por Joseph Kabila no parece apuntar hacia un incremento sustancial de la capacidad del Estado congolés y/o hacia un mayor grado de autoridad estatal en las zonas rebeldes.

De acuerdo con los diversos pactos firmados entre Kigali y Kinshasa, Rwanda debía retirar sus ejércitos de los territorios congoleses. Paralelamente, el gobierno de Joseph Kabila, tendría que desarmar a las milicias hutu rwandesas (los antiguos miembros de las FAR y de las milicias Interhamwe). Ciertamente, Rwanda ha implementado un retiro casi total de sus tropas acantonadas en territorio congolés. Sin embargo, el repliegue no puede considerarse como un retiro absoluto de Rwanda, sino como un repliegue táctico que tiende a una reorganización que por lo pronto ha logrado ya reestructurar al RCD-Goma y crear "...una fuerza de reacción rápida que puede ser desplegada cuando sea necesario en el territorio congolés". (ICG, 2003: 1)

De esta forma, el retiro de tropas militares rwandesas desplegadas hasta el 2002, en el oriente congolés no implica un incremento inmediato de la autoridad del gobierno de Joseph Kabila. Dicho repliegue tampoco puede ser visto como un incremento de la legitimidad del gobierno de Kinshasa al interior de las provincias de Kivu ya que las Asambleas locales siguen estando en manos de elementos mobutistas o incluso de jefes tradicionales sin ningún nivel de arraigo al interior de las poblaciones a las cuales aseguran

representar. (ICG, 2003: 16-17). Más aún, el gobierno de Rwanda continúa estando firmemente establecido en los territorios sureños de la provincia de Kivu del norte (Masisi, Nyaragongo, Goma y Rutshuru).

En estos lugares, la principal estrategia proyectada por el gobierno rwandés ha sido evitar que las poblaciones hutu de Rutshuru proporcionen apoyo a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR) ya que ello resultaría de enorme riesgo para las poblaciones rwandesas de Ruhengeri y Gisenyi situadas al lado oriental de Rutshuru. Rwanda ha logrado atraerse el apoyo de un buen número de personas del grupo hutu que habita en Rutshuru dando preeminencia a los líderes de la comunidad hutu en la administración provincial.

Además los guerrilleros hutu congoleses han sido reclutados en masa con el fin de apaciguarlos y mantenerlos bajo control. De hecho, el gobierno de Kigali incluso ha resuelto respaldar directamente posibles tendencias secesionistas en las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur por medio de la formación de bases de poder cuya lealtad económica y política sea mayor hacia Kigali que hacia Kinshasa. (ICG, 2003: 21)

En resumen, la conformación del gobierno de unidad nacional amplia encabezado por Joseph Kabila representa una fragmentación, antes que un incremento, de las ya *per se* incipientes capacidad y legitimidad estatales. La integración de jefes de las facciones rebeldes –como es el caso de Nyamwisi– no se está traduciendo en una mayor autoridad estatal sobre los territorios ocupados ya que los personajes que hasta antes de integrarse al gobierno unidad nacional de J. Kabila habían fungido como cabecillas rebeldes dejan de tener influencia en dichos territorios una vez que se incorporan al gobierno de Kinshasa. Así también, las rutas comerciales y las zonas de explotación de recursos minerales quedan

en manos de nuevos líderes, cuya autoridad y poder dependen del mantenimiento de la economía de guerra.

Por otra parte, tampoco se pude decir que la incorporación de los líderes rebeldes se traduzca en una mayor presencia legítima del gobierno de Kinshasa en las regiones ocupadas, ya que el poder de los líderes rebeldes ha estado sustentado en la fuerza de las armas y no en el reconocimiento explícito de los pobladores y de las autoridades tradicionales que aún perviven en las zonas ocupadas.

Tierras vacantes y explotación de recursos minerales: repercusiones en las estructuras sociopolíticas aldeanas

La economía de guerra y el fenómeno del *warlordism* combinados con la política de expropiaciones territoriales han involucrado a una buena porción de los habitantes de las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur en la explotación del coltano. La explotación directa de tal mineral tiene importantes efectos negativos en la composición del tejido social de las unidades aldeanas. Tal como sostienen Vlassenroot y Romkema (2004):

> "La industria extractiva está produciendo dos efectos sociales principales. Primero, las ganancias logradas a nivel local a través de procedimientos que implican violencia están generando conflictos y mayores riesgos generados por la creación de nuevos límites entre comunidades, al igual que han incitado una renovada competencia por el acceso a las tierras".

De esta manera, a los conflictos ya existentes en torno a la tenencia de la tierra, mismos que eran consecuencia de las expropiaciones estatales sobre tierras "vacantes" o comunales, o bien de la venta por parte del Estado de tierras comunales consideradas como

ancestrales por algunos grupos socioculturales, ahora se tienen que agregar los conflictos que se desprenden de las disputas y anexiones de tierras ricas en coltano.

De hecho, las actividades de cultivo y siembra nunca son llevadas a cabo en tierras ricas en coltano. Por tal razón, cuando son dejadas en barbecho, estas tierras son consideradas como vacantes y posteriormente expropiadas. Si bien tales tierras se encuentran inactivas, ello no significa que no se hallen dentro de las formas de posesión propias de las unidades aldeanas. Así, las expropiaciones o invasiones que de estas tierras hace el gobierno nacional o las milicias rebeldes, además de las invasiones de tierras que contienen coltano complican todavía más el asunto de las disputas territoriales.

Otro problema originado por la explotación del coltano radica en que muchas comunidades han tenido que –o han sido obligadas a– abandonar sus territorios originarios. Al ser dejadas por sus dueños originales estas tierras son reocupadas para ser usadas como tierras de pastoreo por otras personas que gracias a los beneficios económicos derivados de la explotación del coltano han podido comprar mayores cantidades de ganado y que requieren de mayores extensiones de tierras para pastar sus animales.

Otra de las consecuencias más drásticas que la explotación del coltano ha tenido sobre la organización del tejido social han sido los flujos migratorios de jóvenes, quienes atraídos por las ganancias derivadas de la explotación minera, abandonan sus aldeas de origen. En consecuencia, el tejido social aldeano se ve fuertemente trastornado por las migraciones de jóvenes que parten hacia los sitios mineros. Estas migraciones están produciendo fuertes impactos sobre la fuerza de trabajo y la productividad propia de las unidades domésticas de base agraria. A su vez, el descenso en la productividad de las

unidades aldeanas socava la autoridad tradicional del jefe en tanto gran parte de esta se deriva del grado de bienestar que el jefe tradicional proporcione a sus gobernados.

En síntesis, a lo largo de este capítulo se ha buscado describir que la inserción de los jefes de los movimientos rebeldes en el seno del gobierno unidad nacional amplia no se ha traducido en un incremento significativo de la capacidad y la legitimidad estatal. Lejos de ello, las políticas de integración de los principales personajes dirigentes de las milicias rebeldes en el marco de un gobierno de unidad nacional siguen dejando intactas las condiciones que favorecen el mantenimiento de una economía de guerra al igual que las fuentes de las cuales emana el poder de los señores de la guerra. En el apartado siguiente se hace una disección del texto de la Constitución de la Transición con el objetivo de observar si esta contiene elementos que tiendan a la resolución de los problemas generados por la expropiación de las tierras.

Capítulo IV

LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA TRANSICIÓN

El sistema político congolés ha experimentado desde su independencia cuatro procesos constitucionales. En cualquiera de estos marcos legales no se ha considerado a las unidades aldeanas y a sus formas propias de organizar y ejercer el poder como elemento esencial en la construcción de la capacidad y legitimidad de la autoridad estatal. Así por ejemplo, la Ley Fundamental (*Loi Fundamentale*) de 1960 fue una copia cartabón de la constitución belga que no sólo no tomó en cuenta las realidades subyacentes del país y de su población, sino que incluso nunca fue aprobada por medio de un referéndum libre y justo. (Kadima, 2000: 79)

La Constitución de 1964, también conocida como Constitución de Luluabourg, fue vista como una solución a las limitantes que la anterior Ley Fundamental contenía en el rubro de la separación de poderes. No obstante, la elaboración del marco normativo de Luluabourg tampoco estuvo abierto a la opinión o participación de la población zairense. De forma similar, la Constitución de 1967 fue hecha para concentrar el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial e incluso el poder financiero en manos de una sola persona (Mobutu Sese Seko). Nuevamente, la elaboración del marco legal del año de 1967 no dio ninguna participación significativa a la base social o a las autoridades aldeanas. (Kadima, 2000: 81).

En lo que atañe a la Conferencia Nacional Soberana de 1991-1992, se puede decir que por vez primera en la historia del Congo, el proceso de elaboración constitucional tuvo un carácter incluyente. De hecho, gran parte de las recomendaciones y resoluciones expresadas en la Soberana Conferencia Nacional aún son altamente apreciadas por algunos sectores de la clase política congolesa. Aún así la Constitución de Transición emitida por la

Conferencia en 1992 tuvo serios problemas, ya que el poder ejecutivo estaba dividido entre la figura del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno. La división del ejecutivo llevó al enfrentamiento entre Etienne Tshisekedi y Mobutu Sese Seko, quien finalmente proscribe los trabajos de la Conferencia. Un nuevo proceso de construcción estatal fue puesto en marcha en 1999 mediante los Acuerdos de Paz de Lusaka. Este reciente impulso de construcción constitucional ha desembocado en la promulgación de la Constitución de la Transición el 4 de abril del 2003.

La composición del nuevo gobierno de transición: la fórmula "1+ 4"

Hasta 1999, fecha en que se firmaron los Acuerdos de Lusaka, la elaboración de la Constitución sólo consideró la participación del gobierno de Joseph Kabila y de los tres principales grupos rebeldes, a saber: el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) de Jean Pierre Bemba y de las dos facciones de la Unión Congolesa para la Democracia (RCD) encabezadas respectivamente por Emile Ilunga y Wamba dia Wamba. (Kadima, 2000: 84)

El gobierno de la transición ha quedado conformado desde 2003 por un presidente (Joseph Kabila) y cuatro vicepresidentes: Jean Pierre Bemba (MLC); Abdolaye Yerodia Ndombasi (Gobierno); Arthur Zaidi Ngoma (Oposición Política) y Azarias Ruberwa (RCD-Goma). Los distintos ministerios han quedado en manos de fuerzas muy diversas que van desde la llamada Sociedad Civil hasta los mai mai.

Para Babu (2002: 53), la composición del gobierno de transición implica solamente una fórmula para compartir el poder estatal y no una verdadera democratización, menos aún una restauración del disfuncional sistema político congolés. En efecto, la Constitución de la Transición es la resultante del denominado Diálogo Intercongolés, el cual inicialmente tuvo como objetivo principal derribar a Laurent Kabila del poder. Así, en sentido estricto, el

asesinato de L. Kabila a principios del año 2001 y su sucesión por parte de su propio hijo, Joseph Kabila, habrían dejado sin consignas al proceso de diálogo. Empero, Joseph Kabila decidió retomar las pláticas a fin de terminar con la ocupación territorial de la cual ha sido objeto el Congo desde 1994.

Desde las primeras negociaciones que se realizaron en 2001 en Addis Abeba, Etiopía -y que fracasaron estrepitosamente– los participantes rebeldes exigían que el gobierno de Kinshasa compartiera el poder. El gobierno de J. Kabila, por su parte, se negó a cualquier negociación sin que antes se realizara un retiro efectivo de tropas extranjeras. Así, se tuvieron que acordar nuevas pláticas, mismas que habrían de desembocar en la cumbre de Sudáfrica de 2003.

Por otra parte, si bien el gobierno de transición formado en 2003 ha logrado integrar a grupos –los mai mai y la oposición pacífica– que las tres principales fuerzas rebeldes (MLC, RCD-Goma y RCD-Wamba) habían inicialmente excluido[27], el hecho es que aún así la conformación del gobierno de unidad nacional se presenta como una fórmula política por medio de la cual tanto el gobierno como los grupos rebeldes integrados comparten el incipiente poder estatal. De hecho, el interés del presidente J. Kabila por incluir a los mai mai en el gobierno de unidad nacional obedece no sólo a una política que busca incrementar la presencia del régimen gubernamental en Kivu, sino que además busca

[27] Los quince partidos elegidos en Gaborone decidieron por sí mismos que representaban satisfactoriamente la oposición política pacífica y en consecuencia rehusaron admitir la participación de cualquier otro grupo. "Anunciaron que cada partido sencillamente enviaría cuatro delegados al Diálogo". (ICG, 2001: 6-7) El anuncio por supuesto provocó el reclamo de otros representantes de partidos. De igual modo, no se acordó ninguna representación para la sociedad civil. También los jefes tradicionales de la Alianza Nacional de Autoridades Tradicionales demandaron su cuota correspondiente. De igual modo, la cuestión sobre la representación de los mai mai o de RCD-ML quedó irresuelta. La cuestión de la representación se retomó en Adis Abeba, Etiopía, y finalmente le fueron concedidas cuotas desiguales a dichos grupos.

encontrar posibles aliados que sirvan de contrapeso en el proceso electoral a realizarse en 2005. En efecto:

> "Los Mai Mai representan el mayor capital político para alcanzar la legitimidad en Kivu. Ellos simbolizan la resistencia ante la ocupación extranjera y ante al honor caído de un gran pueblo, humillado por el apetito de sus pequeños vecinos. Joseph Kabila desesperadamente requiere del reconocimiento del liderazgo político de los Mai Mai y de las comunidades de Kivu hostiles al RCD-Goma. Tal apoyo reforzaría su posición en contra del movimiento rebelde y lo convertiría en el líder nacional indiscutible". (ICG, 2001: 13)

El apoyo de los mai mai hacia Joseph Kabila depende inicialmente de la creación de un sexto contingente en el Diálogo Intercongolés, un asunto que ya ha sido resuelto a favor de Kinshasa. Aún así se puede pensar que los mai mai no darán un respaldo incondicional a Joseph Kabila en razón de los agravios de los cuales fueron objeto durante el gobierno de Laurent Kabila. Otro aspecto que pone en entre dicho el apoyo de los mai mai hacia Joseph Kabila es que la resistencia mai mai está dividida en cuatro grandes vertientes establecidas en Kivu. Otros cabecillas mai mai están escondidos y no desean integrarse en las pláticas. (ICG, 2001: 13)

Vino nuevo en odres viejos

Además de los problemas derivados de la integración de algunos de los líderes rebeldes en el gobierno de amplia unidad nacional, al igual que los gobiernos precedentes, Joseph Kabila está intentando manipular nuevamente el asunto de la población tutsi-hutu para dar una apariencia 'étnica' a los diversos conflictos existentes en las provincias de Kivu: se han iniciado investigaciones para averiguar cuántas comunidades hutu o tutsi se

encontraban en el Congo al momento de la independencia y, de esta manera, poder saber cuáles de ellas pueden tener acceso a la nacionalidad congolesa.

> "De esta forma, la comisión [de estudios] anhela ofrecer evidencia contundente de la naturaleza exógena de las poblaciones rwandófonas, y así, excluirlas de facto de la nación congolesa y por ende de cualquier fórmula que busque compartir el poder". (ICG, 2001: 15)

El artículo 11 de la Constitución de la Transición apunta a que sólo los ciudadanos congoleses podrán gozar de plenos derechos civiles y políticos. De ahí entonces que, según lo escrito en la Constitución y las acciones hasta ahora implementadas por el gobierno de Kinshasa, se pueda observar una marcada tendencia hacia la continuación de las políticas que desde 1960 se han realizado con respecto hacia el grupo banyarwanda.

La Constitución deja también intacto el tema de la propiedad comunal y privada de la tierra. Al respecto, el artículo 36 paradójicamente establece que "la propiedad privada es sagrada y que el Estado garantiza el derecho individual o colectivo adquirido de acuerdo a la ley o la costumbre". En ninguno de sus doscientos cinco artículos, la Constitución hace referencia al papel que las autoridades tradicionales habrán de cumplir en la instauración y funcionamiento del gobierno partir de 2005.

El gobierno de unidad nacional, existente desde 2003, tampoco ha abierto espacios de representación para las autoridades aldeanas. Es decir, la configuración legal que habrá de regir la transición democrática y el proceso electoral de 2005 ignora que "La autoridades tradicionales son de vital importancia en razón de que continúan siendo la única institución política que puede reclamar autoridad y legitimidad política". (Tull, 2003: 440)

En suma, la Constitución no está dirigida a resolver el problema de fondo del Estado congolés, a saber: "...la ausencia de prerrequisitos institucionales en términos de capacidad, legitimidad y validez política que sirvan como bases para la transición.

CONCLUSIONES

Las páginas anteriores han buscado describir que las políticas de expropiación territorial que han sido realizadas en el Congo han vulnerado los principios de organización del poder característicos de los sistemas aldeanos en la medida en que estos consideran a la tierra como algo sacro y como fuente de la legitimidad del jefe aldeano. Las políticas de expropiación no sólo se han dirigido a conformar un espacio público estatal en el cual se ha de ejercer la ley, sino que han tendido a despojar a los sistemas políticos aldeanos de sus mecanismos propios de adquisición y ejercicio del poder político.

La historia del Congo desde el periodo colonial evidencia que los africanos han emprendido acciones de resistencia en contra del establecimiento de un aparato estatal de dominación que juzgan como opresivo e ilegítimo. Tal como refiere Van Acker (2000: 9) citando a Dupriez: "Los administradores estatales son lo peor (y) cualquier representante estatal en las áreas rurales juega el rol del policía malvado".

En efecto, la lógica del Estado unitario rechaza cualquier tipo particularismo (Badie, 1995: 69) que se muestre contrario a su dominación. De ahí, la razón por la cual el Estado unitario busque eliminar cualquier forma de organización sociopolítica distinta. La lógica inherente al Estado unitario ignora, sin embargo, que las organizaciones aldeanas representan también una forma de coherencia social. Así, al no proporcionar mecanismos capaces de sustituir el grado de concordancia y cohesión social, la capacidad estatal y, por ende, su legitimidad se reducen al mínimo.

Este trabajo, por tanto ha intentado proponer que mientras los sistemas aldeanos no sean respetados y reconocidos como parte fundamental en la edificación estatal, la capacidad y legitimidad del Estado seguirán siendo escasos o nulos. A pesar de lo anterior, el gobierno de unidad nacional amplia encabezado por Joseph Kabila no está proponiendo

ninguna figura legal que tome en cuenta a las autoridades tradicionales como parte fundamental de la transición política.

El gobierno surgido de los acuerdos de 2003 en Sun City tampoco ha propuesto nada sobre el tema de la tenencia de la tierra. Las dos mayores guerras ocurridas en el Congo contemporáneo tuvieron lugar en las provincias de Kivi, de manera que para algunos autores es imposible pensar en una paz duradera en el Congo sin necesariamente sustentarla en la pacificación de las provincias de Kivi y en resolver las ambigüedades legales en torno a la tenencia de la tierra:

> "En gran medida, los conflictos que aún siguen surgiendo en estas provincias orientales no difieren de otros que acontecen en el resto de un país que casi en su totalidad fue dejado en la ruina y que fue cargado por 32 años de política represiva y divisiva de Mobutu con antagonismos y rivalidades acerca de la tenencia de la tierra y de los recursos naturales". (ICG, 2004: 1)

Vale recordar que las ambigüedades en la tenencia territorial han funcionado como un punto esencial en el surgimiento del fenómeno de los señores de la guerra ya que al no estar clara la condición legal o tradicional que guardan las tierras pueden muy fácilmente ser tomadas y saqueadas. Además, el grado de inseguridad en la posesión de las tierras favorece la búsqueda de protección por parte de las poblaciones locales en los propios señores de las guerra. De esta forma, se establece todo un sistema vicioso en el cual la ambigüedad e inseguridad de la tenencia de las tierras no sólo permite la aparición de los señores de la guerra, sino que además garantiza su continuidad.

En consecuencia, uno de los mayores riesgos para el gobierno de unidad en el Congo es que para las personas involucradas en las prácticas de guerra tiene menores costos económicos y políticos continuar con dichas prácticas:

> "Los saqueadores –congoleses y no-congoleses– que no tienen nada por ganar de una transición exitosa que concluya con elecciones libre y justas, se ocupan de manipular las tensiones étnicas y políticas en las Kivus con el objetivo de impugnar algunos de sus puntos clave tales como la reunificación territorial del país, la transferencia de la recaudación de impuestos hacia Kinshasa...". (ICG, 2004: 2)

En suma, la integración de los principales grupos rebeldes que operan en las ciudades clave del oriente congolés no es sino una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr un verdadero gobierno de unidad nacional. La conformación de un Estado legítimo y la construcción de una capacidad estatal adecuada tendrá –necesaria y suficientemente– que pasar no sólo por la integración en el seno del gobierno de los principales grupos rebeldes, sino también por darle claridad y seguridad a los sistemas aldeanos de tenencia de la tierra.

Referencias Bibliográficas

- Anstey, Roger (1966): *King Leopold's Legacy. The Congo Under Belgian Rule.* London: Oxford University Press.
- Babu Katulondi, Kabasu (2002): *Dialogue Inter.-Congolais. Une polyarquie pour la Reussite de la Transition au Congo.* Johannesburg: Global Ubuntu Development Publications.
- Badie, Bertrand (1992): *L'Etat importé.* Paris: Fayard.
- Callaghy. Thomas M. (1984): *The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective.* New York: Columbia University Press.
- Coquery-Vidrovitch, Catherine (1985): "Economic Changes in Africa in the World Context", *General History of Africa.* Vol. VIII, Chapter 11, California: UNESCO.
  ----------(1987): *Rébelllions-Révolutions au Zaire.* 1963-1965. Vol. 1 et 2. Paris: L'Harmattan.
- Doornbos, Martin (1990): "The African State in Academic Debate: Retrospect and Prospect", *The Journal of Modern African Studies.* Vol. 28, No. 2.
- Englebert, Pierre (2000a): "Pre-Colonial Institutions, Post-Colonial States, and Economic development in Tropical Africa", *Political Research Quarterly.* Vol. 53, No. 1.
  ----------(2000b): *State Legitimacy and Development in Africa.* Boulder: Lynne Rienner.
- Fall, Yoro (1985): "Colonización y Descolonización en África: Dimensión Histórica y Dinámica en las Sociedades". *Annales* (Vol., y No, pend.)
- Gondola, Didier (2002): *The History of Congo.* Cunnecticut: Greenwood Press.
- Hyden, Goran (1980): *Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and Uncaptured Peasantry.* Los Angeles: University of California Press.
- Isaacman, Allen (1990): "Peasants and Rural Social Protest in Africa". *African Studies Review.* Vol. 33.
- Jewsiewicki, Bogumil. (1980) : "Political Consciousness among African Peasants in Colnial Zaïre". *Review of African Political Economy.* No. 19.
- Kadima, Denis (2000): "The Inter-Congolese Dialogue and Constitution Making" en Kadima, Denis & Kabemba Claude (2000): *Wither regional peace and security.* Pretoria: Africa Institute of South Africa.
- Koen Vlassenroot & Hans Romkema (2004): "The Emergence of a New Order? . Resources and War in Eastern Congo" *The Journal of Humanitarian Assistance.* http://www.jha.ac/articles/_edn1
- Lemarchand, René (2003) : "The Democratic republic of Congo: from Failure to Potential reconstruction" en Rotber Robert I. State Failure and State Weakness in Time of Terror. Washington D.C: Brookings Institute Press.
- Leroy, E. (s/f): *L'odyssée de l'Etat.* Dossier thématique dirgé par Étienne Le Roy. Paris: Université de Paris I. Laboratoire d'anthropologie juridique.
- Lindberg, Staffan I. (2003): "It's our Time to 'chop': Do Elections in Africa Feed Neo-patrimonialism rather than Counteract it". *Democratization.* Vol. 10, No. 2.
- MacGaffey Wyatt (1997): "Kongo identity", en Mudimbe (1997): Mudimbe V. *ed* (1997) : *Nations, identities, cultures.* Durham: Duke University Press, 1997, 233p.
- Mamdani, Mahmood (1996): *Ciudadano y Súbdito.* México: Siglo XXI.

----------(2003): "Darle Sentido Histórico a la Violencia Política en África Poscolonial", *Istor*. Num.5, Año IV.
- M´Bokolo, Elikia (2003): "Afrique Centrale: le temps des massacres", en Ferro Marc: *Le Livre Noir du Colonialisme. XVIe-XXIe siecle: de l´extermination a la repetance*. Paris: Robert Laffont.
- Moore, David (2001): "Neoliberal Globalisation and the Triple Crisis of 'modernization' in Africa: Zimbabwe, the Democratic Republic of the Congo and South Africa". *Third World Quarterly*. Vol. 22, No. 6.
- Newbury, David (1986): "From 'Frontier' to 'Boundary': Some Historical Roots of Peasant Strategies of Survival in Zaire", en Nzongola-Ntajala: *The Crisis in Zaire: Myths and Realities*. New Jersey: Africa World Press Inc.
- Ntalaja, Nzongola (1989): "Subdesarrollo y Dictadura en el Zaire de Mobutu" en Anyang´, Peter: *Estado y Sociedad en el África Actual*. México: El Colegio de México.
- Parekh, Bhikhu (2000): *Rethinking Multiculturalism*. Basingstoke: Mc Millan Press.
- Praderband, Pierre: *Listening to Africa. Developing Africa from the Grassroots*. New York: Praeger.
- Poulantzas, Nicos (1980): *Estado, Poder y Socialismo*. México: Siglo XXI.
- Reno, William (1998): *Warlord Politics and African States*. Boulder: Lynne Rienner.
- Schatzberg, Michael G. (1982): "Le mal zairois: Why Policy Fails in Zaire". *African Affairs*. Vol 81, No. 324.
- Terray, Emmanuel (1986): *Afrique Plurielle, Afrique Actuelle. Hommage à Georges Balandier*. Paris: L´Harmattan.
- Tshiyembe, Mwayila (2003): "Activisme Politique et Affrontements Meurtriers. Transition à Hauts risques au Congo-Zaïre". *Le Monde Diplomatique*. www.monde-diplomatique.fr/2003/07/TSHIYEMBE/10264
- Tull, Denis M. (2003): "A Reconfiguration of Political Order? The State of the State in North Kivu (DR Congo)". *African Affairs*. No. 102.
- Van Acker, Frank (1988-1989): "La Pembénisation du Haut-Kivu: Oportunisme et Droits Fonciers Revisistés". *L´Afrique des Grands Lacs*. Annuaire.
- **Vlassenroot, Koen & Romkema, Hans (2004): "The Emergence of a New Order? Resources and War in Eastern Congo". *The Journal of Humanitarian Assistance*. Disponible en http://www.jha.ac/articles/_edn1**
- Weber, Max (1958). *Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Weiss, Herbert (1995): "Zaire: Collapsed Society, Surviving State, Future Polity" en Zartman, William (1995): *Collapsed States*. Boulder: Lynne Rienner.
- Willame, Jean-Claude (1992): *L´Automne d´un Despotisme*. Paris: Karthala.
- Young, Crawford (1984): "Zaire: Is There a State". *Canadian Journal of African Studies*. Vol. 18. No. 1.
- Zartman, William (1995): *Collapsed States*. Boulder: Lynne Rienner.

Hemerografía

- Congo Visión (2004): Composición du gouvernement de transition en RDC-Congo. Autor: http: // www.congovisión.com/nouvelles/afro54.html
- The Economist: *A Report From Congo. Africa's Great War*. Autor. 4.VII.2002.

Documentos

- Global Security, GS (2003): *Regional Conflict in the Democratic Republic of Congo*. Autor. www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.htm
- Integrated Regional Information Network, IRIN (2002): *IRIN Web Special on Ituri Eastern DRC*. United Nations. www.irinnews.org/webspecials/Ituri/srep8.asp
- International Crisis Group, *ICG*, (2003): *"The Kivus. The Forgotten Crucible". Report No. 56* Nairobi/ Brussels: Autor.
- International Crisis Group, *ICG*, (2001): "The Inter-congolese Dialogue. Political Negotiation or Game of Bluff". ICG *Africa Report No. 37*. Bruselas/Nairobi/Kinshasa.
- United Nations Security Council, *UNSC* (2001): *Report of the Panel of Experts on Illegal Explotation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo*. Autor.
- "Constitution de la Transition". Promulguee le 4 avril 2003 par le President de la Republique sur la base du Projet de Constitution de la Transition souscrit a Pretoria par toutes les parties le 6 mars 2003. http://www.monuc.org/downloads/constitution_transition.pdf

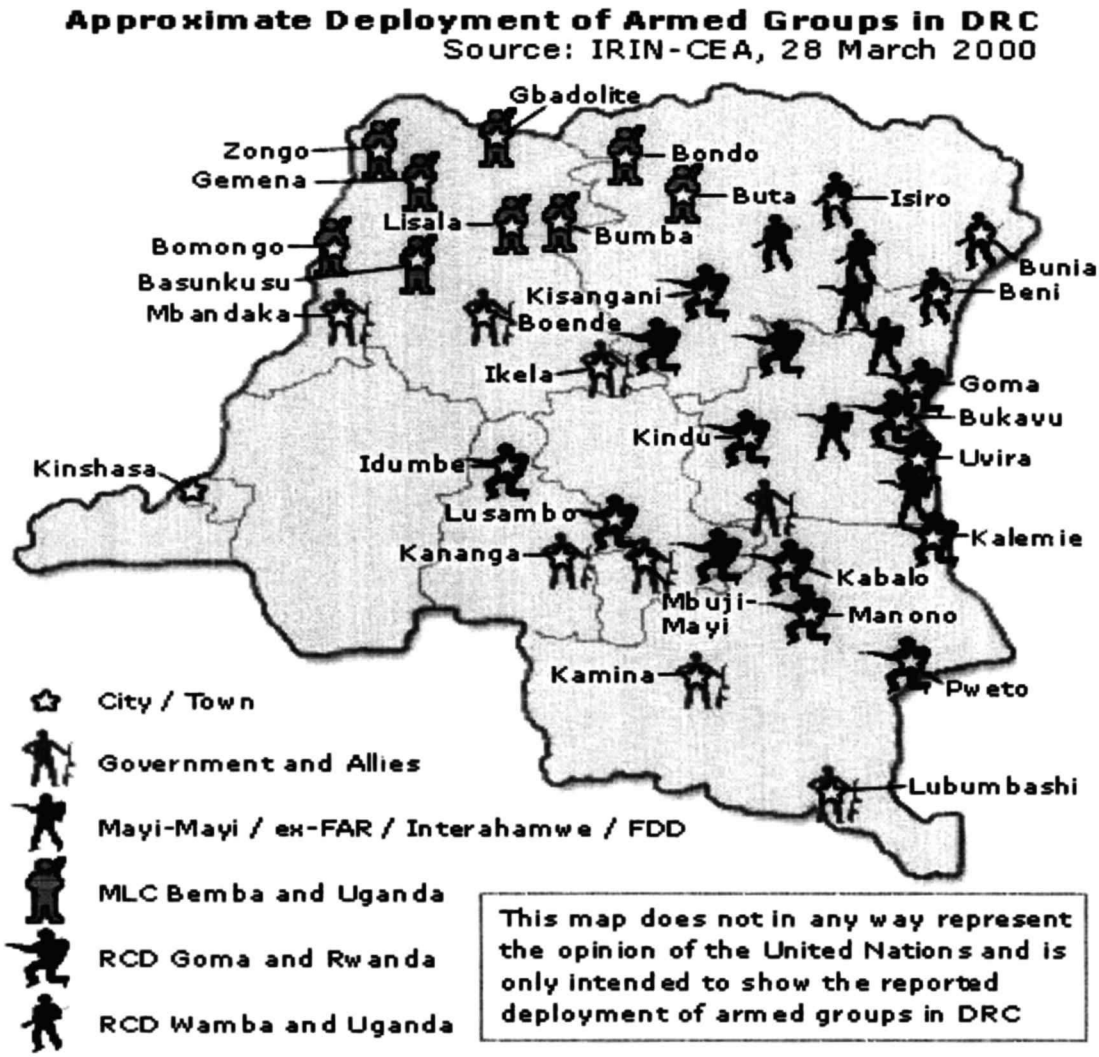
Siglas

- AFDL: Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire. Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire. Fue creada en 1996 bajo la supervisión y recursos del gobierno rwandés.
- ANC: Armée Nationale Congolaise. Armada Nacional del Congo. Es el brazo armado de la RCD
- CNS: Conférence National Souveraine. Conferencia Nacional Soberana.
- FAPC: Forces Armées de Peuple Congolais. Fuerzas Armadas del Pueblo Congolés. Es un grupo armado fundado a principios del año 2003 por un personaje disidente de la UPC, Jérôme Kakawavu. Hasta el mes de junio de 2003, la FAPC había tenido el control de la ciudad de Mongbwalu (a 80 km al noreste de Bunia). Desde junio del 2003 Mongbwalu cayó en manos de la UPC.
- FAZ: Forces Armées du Congo. Fuerzas Armadas del Congo.
- FDLR: Forces Démocratiques de Libérations du Rwanda. Fuerzas Democraticas para la Liberación de Rwanda. Es el término que se ha usado para dar cuenta del movimiento político-militar de los rebeldes hutu rwandeses. Fue creado inicialmente en el Congo con el apoyo del entonces presidente Laurent Kabila.
- FNI: Front de Nacionalistes et Intégrationnistes. Frente de Nacionalistas e Integracionistas. Un movimiento de base lendu.

- FPDC: Forces pour la Paix et la Democratie au Congo. Fuerzas por la Paz y la Democracia en el Congo. Apoyada por el gobierno de Uganda.
- FRPI: Front de Résistance Populaire pour l´Ituri. Frente de Resistencia Popular para Ituri. Muy cercano al gobierno de Kinshasa y de base lendu.
- HCB: Huileries du Congo Belge. Compañía de Palma de Aceite del Congo Belga.
- MLC: Mouvement pour la Libération du Congo. Movimiento para la Liberación del Congo.
- MPR: Mouvement Populaire de la Revolution. Movimiento Popular de la Revolución.
- PUSIC: Parti pour l´unité et la sauvegarde de l´integrité du Congo. Partido para la Salvaguarda de la Integridad del Congo. Un movimiento disidente de la UPC y sustentado por el Gobierno de Uganda.
- RCD: Rassemblement Congolais pour la Democracie. Agrupación Congolesa para la Democracia.
- El RCD-ML: Rassemblement Congolais pour la Democracie-Mouvement du Liberation. Agrupación Congolesa para la Democracia-Movimiento de Liberación Es una agrupación rebelde apoyada fuertemente por el gobierno de Uganda. También se conoce como RCD-Kisangani.
- El RCD-Goma: Rassemblement Congolais pour la Democracie-Mouvement du Liberation. Agrupación Congolesa para la Democracia-Goma. Es también un grupo rebelde por el gobierno de Rwanda.
- RPA: Rwandan Patriotic Army. Ejército Patriótico Rwandés.
- RPF: Rwandan Patriotic Front. Frente Patriótico Rwandés.
- UPC: Union des Patriotes Congolais. Es un movimiento dominado por el grupo Hema y está apoyado fuertemente por el gobierno de Rwanda.

ANEXO

Mapa 1: Grupos rebeldes en territorio congolés en el año 2000. (Fuente: Red Internacional de Información Integrada. Naciones Unidas)



Mapa 2: Provincias del Congo